



Sustento del uso justo
de Materiales Protegidos
derechos de autor para
fines educativos



UCI

Universidad para la
Cooperación Internacional

UCI
Sustento del uso justo de materiales protegidos por
derechos de autor para fines educativos

El siguiente material ha sido reproducido, con fines estrictamente didácticos e ilustrativos de los temas en cuestión, se utilizan en el campus virtual de la Universidad para la Cooperación Internacional – UCI – para ser usados exclusivamente para la función docente y el estudio privado de los estudiantes pertenecientes a los programas académicos.

La UCI desea dejar constancia de su estricto respeto a las legislaciones relacionadas con la propiedad intelectual. Todo material digital disponible para un curso y sus estudiantes tiene fines educativos y de investigación. No media en el uso de estos materiales fines de lucro, se entiende como casos especiales para fines educativos a distancia y en lugares donde no atenta contra la normal explotación de la obra y no afecta los intereses legítimos de ningún actor.

La UCI hace un USO JUSTO del material, sustentado en las excepciones a las leyes de derechos de autor establecidas en las siguientes normativas:

a- Legislación costarricense: Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, No.6683 de 14 de octubre de 1982 - artículo 73, la Ley sobre Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039 – artículo 58, permiten el copiado parcial de obras para la ilustración educativa.

b- Legislación Mexicana; Ley Federal de Derechos de Autor; artículo 147.

c- Legislación de Estados Unidos de América: En referencia al uso justo, menciona: "está consagrado en el artículo 106 de la ley de derecho de autor de los Estados Unidos (U.S, Copyright - Act) y establece un uso libre y gratuito de las obras para fines de crítica, comentarios y noticias, reportajes y docencia (lo que incluye la realización de copias para su uso en clase)."

d- Legislación Canadiense: Ley de derechos de autor C-11– Referidos a Excepciones para Educación a Distancia.

e- OMPI: En el marco de la legislación internacional, según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual lo previsto por los tratados internacionales sobre esta materia. El artículo 10(2) del Convenio de Berna, permite a los países miembros establecer limitaciones o excepciones respecto a la posibilidad de utilizar lícitamente las obras literarias o artísticas a título de ilustración de la enseñanza, por medio de publicaciones, emisiones de radio o grabaciones sonoras o visuales.

Además y por indicación de la UCI, los estudiantes del campus virtual tienen el deber de cumplir con lo que establezca la legislación correspondiente en materia de derechos de autor, en su país de residencia.

Finalmente, reiteramos que en UCI no lucramos con las obras de terceros, somos estrictos con respecto al plagio, y no restringimos de ninguna manera el que nuestros estudiantes, académicos e investigadores accedan comercialmente o adquieran los documentos disponibles en el mercado editorial, sea directamente los documentos, o por medio de bases de datos científicas, pagando ellos mismos los costos asociados a dichos accesos.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

en **CENTROAMÉRICA, PANAMÁ,**
REPÚBLICA DOMINICANA,
MÉXICO y HAITÍ



Panorama y respuestas para garantizar
la seguridad alimentaria en la región

María Cecilia Deza y Marta Ruiz-Arranz

TABLA de CONTENIDO



PANORAMA Y PERSPECTIVAS DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN CENTROAMÉRICA, PANAMÁ, REPÚBLICA DOMINICANA (CAPARD), MÉXICO Y HAITÍ

María Cecilia Deza, Marta Ruiz-Arranz,
Arnoldo López, Melanie Jiménez,
Carlos Eggers

p. 02

I.
Panorama de la
seguridad alimentaria
en la región
p. 03

II
Respuestas de política
p. 15

III.
Perspectivas y
recomendaciones
p. 17



ANEXO

Notas por país

p. 24

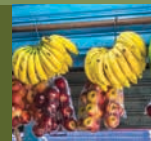


Belice
María Cecilia Deza

p. 25

Costa Rica
Pablo Vega y Josué Sibaja

p. 28



El Salvador
Juan José Barrios y Alejandro Gasteazoro

p. 30

Guatemala
Jordi Prat y Jorge Coj Sam

p. 34



Haití
Laura Giles Alvarez y Nerlyne Jeanbaptiste

p. 38

Honduras
Jordi Prat, Ana Andino y Eduardo Camilo Pacheco

p. 42



México
Agustín Filippo y Miguel Ángel Jiménez

p. 46

Nicaragua
Julia Escobar y Gabriela Orozco

p. 49




Panamá
Carlos Garcimartín y Rubilú Rodríguez

p. 52

República Dominicana
Juan Carlos López y Joaquín Zentner

p. 56





**PANORAMA Y PERSPECTIVAS DE
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
EN CENTROAMÉRICA, PANAMÁ,
REPÚBLICA DOMINICANA
(CAPARD¹), MÉXICO Y HAITÍ**

María Cecilia Deza, Marta Ruiz-Arranz,
Arnoldo López, Melanie Jiménez,
Carlos Eggers

1 CAPARD incluye: Belice, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

I. Panorama de la seguridad alimentaria en la región

GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN ES VITAL PARA LOGRAR EL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE HAMBRE CERO A 2030.

El segundo objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (UN) es eliminar el hambre para 2030, reduciendo la prevalencia de la subalimentación y garantizando la seguridad alimentaria y la adecuada nutrición de la población². El consumo de alimentos de calidad adecuada y de manera regular es crucial para mejorar la productividad de los individuos, proteger la salud mental y física reduciendo la probabilidad de sufrir enfermedades, y contribuir efectivamente a la generación de empleo e ingresos, promoviendo el crecimiento sostenible y el desarrollo.

La prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave en CAPARD superó al promedio de América Latina y el Caribe (ALC).

La proporción de subalimentación³ y de población bajo inseguridad alimentaria moderada o grave⁴ son indicadores de acceso a alimentos, una de las dimensiones de la seguridad alimentaria establecidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés). En 2019, el 39% de la población de CAPARD enfrentaba inseguridad alimentaria moderada o grave, superior al promedio de ALC (31.7%), siendo la sub-

región con mayor porcentaje de población en estas condiciones (Figura 1). Haití y Costa Rica son los de mayor y menor inseguridad alimentaria de todo ALC, respectivamente (Figura 2). CAPARD, México y Haití representan el 31% de la población de ALC y concentran aproximadamente el 36% de la población en situación de inseguridad alimentaria grave o moderada. De manera similar, la prevalencia de la subalimentación en CAPARD se mantuvo por encima del país típico de ALC y de otras subregiones desde 2015.

La llegada de la pandemia del COVID-19 redujo los ingresos de las familias, afectando el acceso a alimentos.

La irrupción de la pandemia del COVID-19 a inicios de 2020 significó una amenaza para la seguridad alimentaria en CAPARD, México y Haití, al igual que para ALC en general. La pérdida de ingresos de las familias por la destrucción de empleos de forma prolongada redujo significativamente la capacidad de compra de alimentos básicos. El desempleo en la región aumentó entre 4 y 12 puntos porcentuales en 2020 y el ingreso per cápita se redujo en 9.1%, en promedio, en términos reales.

Los países que tienen información disponible, reportan que la pobreza extrema aumentó

2 <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/>

3 La subalimentación, o hambre, es definida por la FAO como “una sensación física incómoda o dolorosa, causada por un consumo insuficiente de energía alimentaria. Se vuelve crónica cuando la persona no consume una cantidad suficiente de calorías (energía alimentaria) de forma regular para llevar una vida normal, activa y saludable”.

4 La escala de inseguridad alimentaria (leve, moderada, grave) de la *Food Insecurity Experience Scale* (FIES, por sus siglas en inglés) se mide en

base a las respuestas de los individuos a ocho preguntas relacionadas a dificultades para acceder regularmente a alimentos debido a la falta de recursos. La inseguridad alimentaria moderada ocurre cuando la persona, por falta de recursos, en los últimos 12 meses tuvo dificultades para llevar una dieta saludable, su capacidad de acceder a alimentos es incierta y ocasionalmente se saltó una comida o se quedó sin alimentos. La inseguridad alimentaria grave define una situación en la que la persona se quedó sin alimentos o estuvo todo el día sin comer varias veces durante el año (fuente: FAO).

en 2020 y, aunque se redujo en 2021, todavía se mantiene por encima de los niveles pre-pandemia.

En el momento más álgido de la pandemia, más del 40% de hogares en Guatemala, Honduras y República Dominicana declaró haberse quedado sin comida debido a la falta de ingresos⁵. Como resultado, la prevalencia de la inseguridad alimentaria se incrementó a 42.1%

en CAPARD en 2020, afectando a 19 millones de personas, y a 62 millones si se agrega México y Haití (Figura 1).

La paralización de actividades clave para la producción y comercialización de alimentos durante los confinamientos afectaron la disponibilidad alimentaria.

FIGURA 1: Prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave por regiones (% de la población)

FUENTE: FAO, EL CARIBE EXCLUYE HAITÍ.

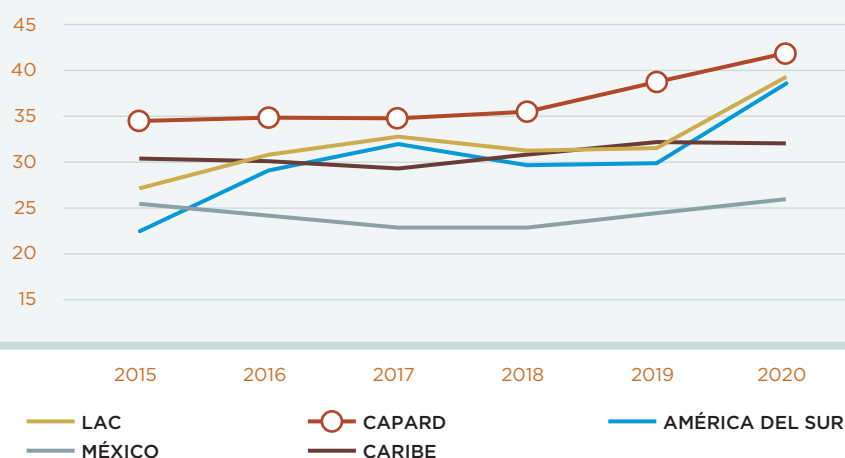
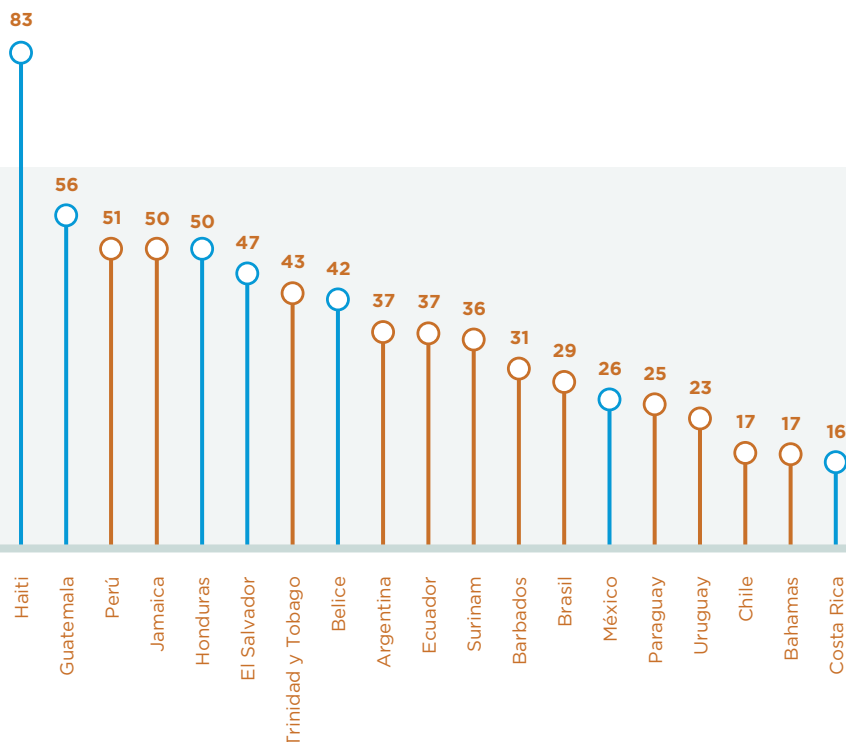


FIGURA 2: Prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en ALC, promedio 2019-2021 (% de la población)

FUENTE: FAO.



5 World Bank COVID-19 Household Monitoring Dashboard: <https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2020/11/11/covid-19-high-frequency-monitoring-dashboard>. Se reportan las respuestas a la pregunta: En los últimos, 30 días, ¿se quedó sin alimentos debido a la falta de recursos?

ALC se caracteriza en general por tener una adecuada disponibilidad de alimentos. Sin embargo, esta se vio comprometida por la paralización de la mayor parte de actividades productivas durante el periodo de confinamiento, una medida adoptada en casi todo el mundo para mitigar la expansión de los contagios, y seguida por todos los países de la región en mayor o menor medida⁶. Si bien la actividad agrícola fue uno de los pocos sectores que pudo crecer durante la pandemia en varios países, las severas restricciones a la manufactura, el comercio y al transporte afectaron el abastecimiento de alimentos básicos, principalmente en zonas urbanas. Aunque esta fue la tendencia general, existen excepciones como el caso de Belice, donde la crisis de la pandemia motivó la conversión de trabajadores desempleados a agricultura, lo que resultó en un aumento significativo de la producción agrícola (ver nota de país en el Anexo).

Las interrupciones a las cadenas globales de suministro causadas por la pandemia iniciaron una escalada inflacionaria que ha sido agudizada por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

La reapertura de las economías y la progresiva recuperación de las actividades una vez superada la peor fase de la pandemia se dio en un contexto caracterizado por distorsiones en la oferta laboral, cambios drásticos en la demanda, interrupciones en las cadenas de suministro resultado de reiterados confinamientos en los principales mercados manufactureros, entre otros. Las interrupciones a los sistemas alimentarios introducidas por esta nueva dinámica fueron exacerbadas por el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania a inicios de 2022, resultando en una escalada de precios de la energía y de materias primas alimentarias de las que dichos países son proveedores mundiales⁷.

6 Ver más detalles de las medidas adoptadas por los gobiernos en: BID.2020. El Impacto del COVID-19 en las economías de Centroamérica, Haití, México, Panamá y República Dominicana.

7 Rusia exporta el 10% del petróleo, 14% del trigo y 19% de fertilizantes en el mundo. Ucrania representa el 10% del mercado mundial de trigo y es el quinto principal exportador de este producto en el mundo.

Los *commodities* más afectados fueron el petróleo, gas, maíz, trigo, semilla de soya (Figura 3), así como los fertilizantes.

La mayoría de los países de CAPARD y México son dependientes de las importaciones de los alimentos e insumos afectados por la inflación global.

El aumento de las cotizaciones internacionales de la energía y los alimentos básicos representó un choque de oferta negativo importante para los países de la región, para quienes las importaciones de estos productos tienen un peso importante en las compras totales del exterior. Las importaciones de maíz y trigo representan entre 15% y 20% del total de alimentos importados en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y la mayoría de los países son dependientes de las importaciones de granos básicos para su consumo (Figura 4).

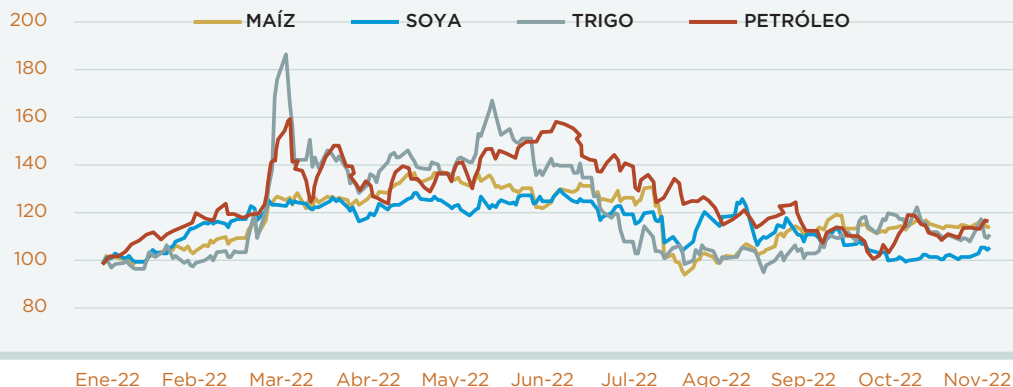
Al mismo tiempo, el arroz y los cereales representan más del 20% de la canasta básica alimentaria (CBA) en Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y el Salvador .

Finalmente, Costa Rica, Guatemala, Belice, República Dominicana y Honduras son más intensivos en el uso de fertilizantes que el promedio de ALC y del mundo (Figura 5), los cuales son principalmente importados, mientras que Panamá importa la totalidad del fertilizante que su sector agrícola requiere. En este contexto, la inflación de alimentos ascendió a 11.7% en promedio en CAPARD, Haití y México⁸, un máximo en más de una década (Figura 6). Los efectos de los mayores costos de estos insumos son tanto directos en los precios de bienes finales que los utilizan, como de segunda vuelta al presionar al alza los precios de otros bienes de la canasta de los consumidores y las expectativas inflacionarias⁹, hecho que motivó respuestas de política monetaria por parte de los Bancos Centrales de la región y otras políticas que se discuten más adelante.

8 Corresponde a septiembre de 2022

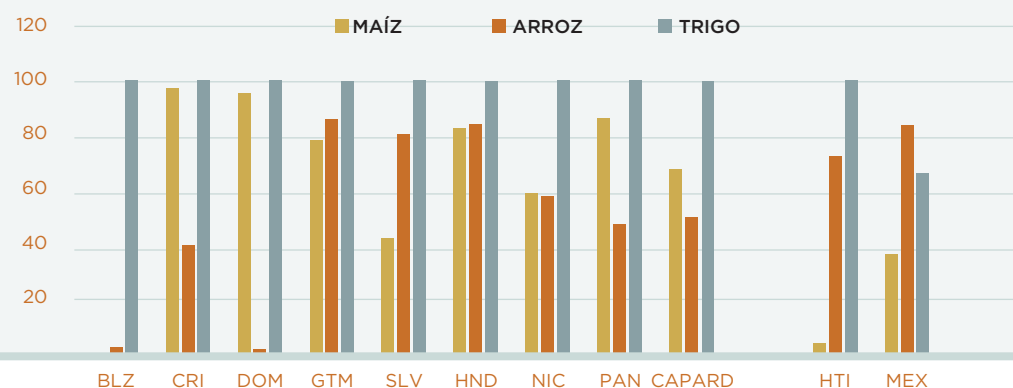
9 Fuente: Consejo Monetario Centroamericano. Reporte de Inflación Mensual Regional. Julio 2022

FIGURA 3: Cotizaciones de alimentos básicos y energía (Índice enero 2022=100)



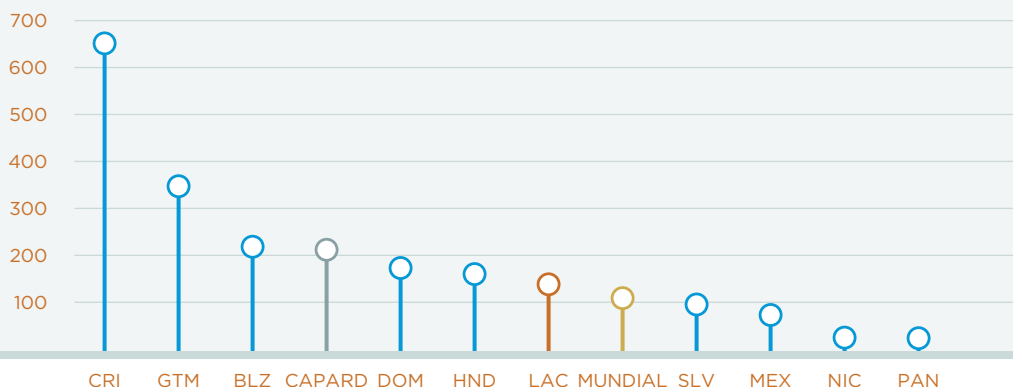
FUENTE: BLOOMBERG.

FIGURA 4: Dependencia de las importaciones de granos básicos con relación a su consumo promedio de los últimos 3 años (%)



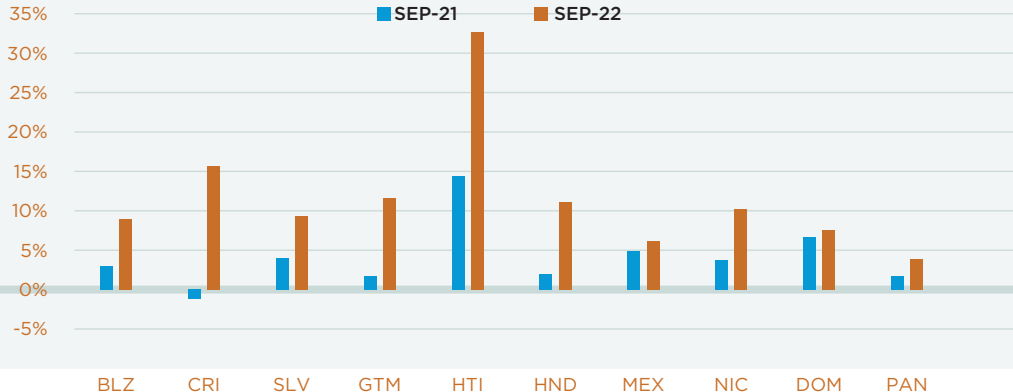
FUENTE: CEPAL. SE CONSIDERAN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS DISPONIBLES PARA CADA PAÍS.

FIGURA 5: Consumo de fertilizantes, 2018 (kilogramos por hectárea de tierra cultivable)



FUENTE: USAID.

FIGURA 6: Inflación de alimentos (Var. %)



FUENTE: INSTITUTOS DE ESTADÍSTICA. PARA HAITÍ CORRESPONDE A AGOSTO 2021 Y JULIO 2022.

La coyuntura reciente amenaza los avances logrados en las otras dimensiones de la seguridad alimentaria y ha puesto en evidencia retos estructurales.

Además del acceso, las otras dimensiones de seguridad alimentaria del marco de la FAO (disponibilidad, utilización, y estabilidad alimentaria, Figura 7), también se han visto afectadas por la coyuntura actual:

A. UTILIZACIÓN. Si bien la región ha avanzado en reducir la desnutrición y los casos de retraso en el crecimiento en niños (Figura 8), en algunos países se comienzan a reportar incrementos, como un aumento en los casos de desnutrición aguda en Guatemala (Figura 9). Por su parte, en la mayoría de los países, alrededor del 30% de hogares reporta una reducción en la calidad de los alimentos consumidos¹⁰. La utilización de alimentos también se ve afectada por insuficiente o deficiente acceso a agua potable y saneamiento, que puede llegar a alcanzar hasta el 20% de la población, como en el caso de Haití.

B. DISPONIBILIDAD. La productividad del sector agrícola del país típico de CAPARD es menor al promedio de ALC (Figura 10). La baja productividad de la actividad agropecuaria responde al dominio del sector por unidades productoras a pequeña escala, a limitadas inversiones en desarrollo, innovación agrícola e infraestructura rural y resiliente al riesgo de desastres naturales y eventos de cambio climático. Todo ello dificulta la óptima disponibilidad de alimentos en zonas urbanas y pone en riesgo a los hogares dedicados a la agricultura en

zonas rurales, quienes dependen del autoconsumo.

C. ESTABILIDAD. La volatilidad de la producción agropecuaria produce inestabilidad en la provisión de alimentos. Después de una evolución positiva en 2020 y 2021, ya en 2022 se observan caídas en la producción agropecuaria en varios países (Figura 11). Las interrupciones en el comercio inducidas por la pandemia son también perjudiciales para la disponibilidad de alimentos en países que dependen altamente de las importaciones, amenazando la estabilidad alimentaria. Además, los desastres naturales, como sequías, inundaciones, terremotos, entre otros, ocasionan pérdidas importantes de cultivos y producción agropecuaria. Las sequías en el “corredor seco”¹¹ centroamericano de 2014-2015 y 2018-2019 así como los huracanes Eta e Iota son ejemplos recientes de eventos naturales que amenazan la seguridad alimentaria¹². Los países de la región, con excepción de México y Panamá, se ubican entre los 50 países más afectados por eventos climáticos en el periodo 2000-2019 según el Índice de Riesgo Climático Global, con Belice y Haití como especialmente vulnerables. Países como Guatemala enfrentan periodos estacionales de inseguridad alimentaria que pueden ser exacerbados por eventos del clima. La baja productividad agrícola y su vulnerabilidad a eventos naturales hacen que la actividad sea volátil¹³, y con ella la estabilidad de

10 World Bank COVID-19 Household Monitoring Dashboard: <https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2020/11/11/covid-19-high-frequency-monitoring-dashboard>. Se reportan las respuestas a la pregunta: ¿En los últimos 30 días, no fue capaz de comer alimentos saludables o preferidos debido a la falta de recursos?

11 El “corredor seco” es una zona que incluye partes del territorio de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, donde residen alrededor de 10 millones de personas, dedicadas principalmente a la agricultura. Esta zona es altamente vulnerable, enfrentando periodos largos de sequía alternados con otros de fuertes lluvias. Esta variabilidad climática extrema genera potenciales pérdidas significativas de cultivos. Fuente: FAO.

12 En Nicaragua y Guatemala, las pérdidas en agricultura fueron 0.2% del PIB en cada caso, mientras que en Honduras fueron de 1.2% del PIB.

13 La volatilidad de la producción agropecuaria, medida por la desviación estándar del crecimiento del PIB agropecuario, alcanzó cerca de 3 puntos porcentuales en los últimos años.

alimentos. Finalmente, las protestas sociales y la inestabilidad política en algunos países podrían afectar el

abastecimiento de alimentos tanto locales como importados.

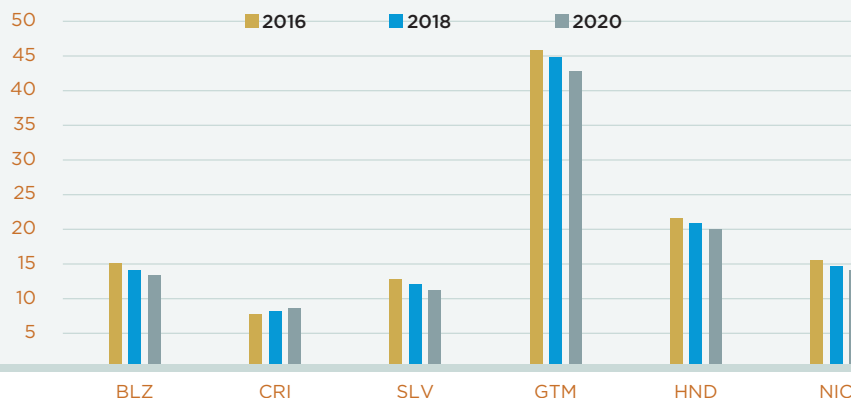
FIGURA 7: Marco de la FAO para analizar seguridad alimentaria

4 DIMENSIONES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Disponibilidad de alimentos	Acceso a alimentos	Utilización de alimentos	Estabilidad alimentaria
Abastecimiento de alimentos mediante producción nacional o comercio internacional	Recursos disponibles de la población para adquirir una cantidad adecuada de alimentos	Calidad de los alimentos necesarios para lograr un estado nutricional adecuado	Capacidad de tener acceso continuo a los alimentos necesarios para mantener una dieta nutritiva en todo momento

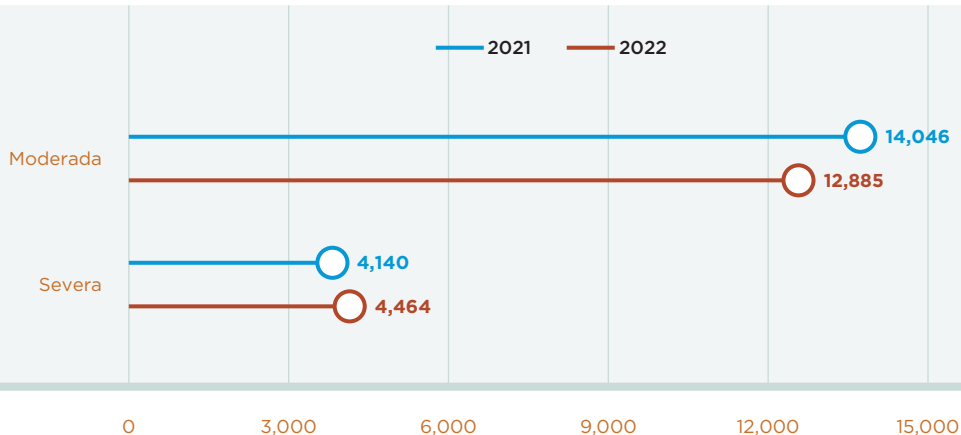
FUENTE: MARCO SECTORIAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL BID

FIGURA 8: Porcentaje de niños menores de 5 años con retraso del crecimiento (%)



FUENTE: FAO.

FIGURA 9: Casos de desnutrición aguda en Guatemala (acumulado a octubre de cada año)



FUENTE: MINISTERIO DE SALUD DE GUATEMALA.

FIGURA 10: Productividad agrícola, 2019 (Índice 2015=100)

FUENTE: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE ESTADOS UNIDOS. CORRESPONDE A LA PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES DEL SECTOR AGRICULTURA.

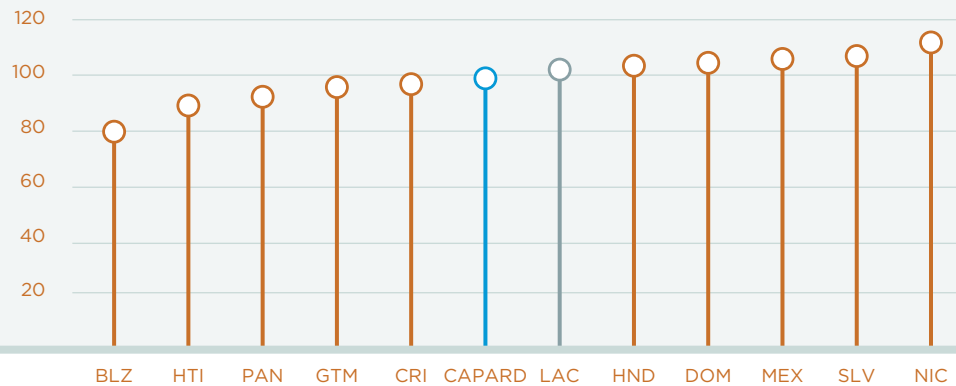
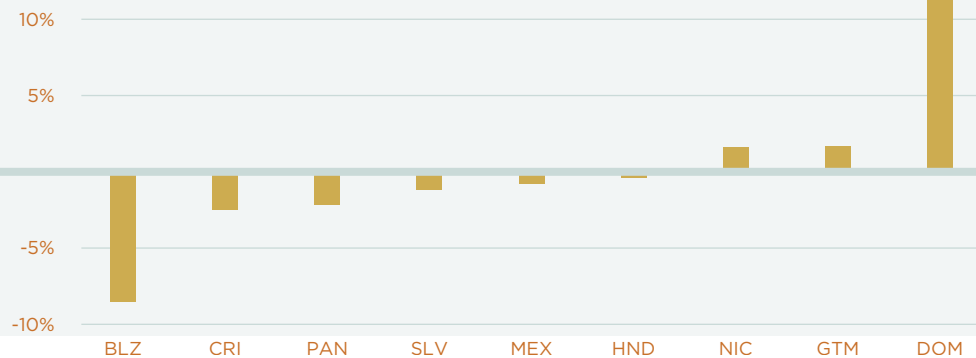


FIGURA 11: Variación trimestral de la actividad económica agropecuaria 2T2022 (serie desestacionalizada)

FUENTE: BANCOS CENTRALES DE CADA PAÍS. PARA GUATEMALA CORRESPONDE AL 1T2022.



La clasificación por fases del IPC¹⁴ confirma que las condiciones de inseguridad alimentaria en los países del triángulo norte se han agudizado.

El escenario más reciente revela que entre el 40% y 50% de la población en Guatemala, Honduras y El Salvador se encontraba en inseguridad alimentaria acentuada, afectando alrededor de 14 millones de personas (Figura 12). Por su parte, más del 25% de la población

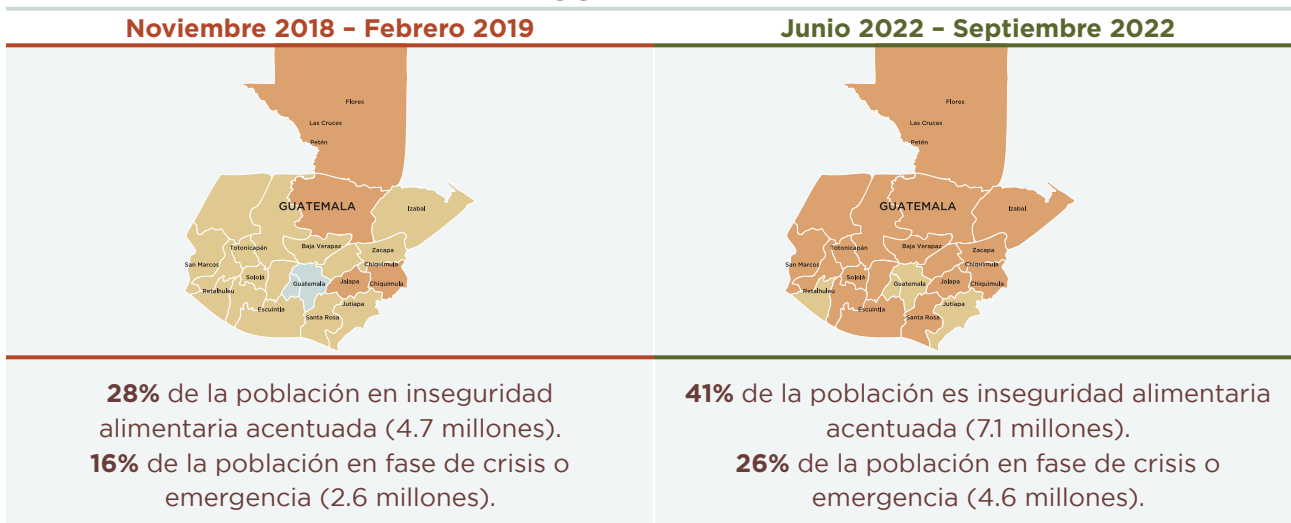
en Guatemala y Honduras enfrenta una situación de crisis o emergencia alimentaria (7.2 millones de personas). Este panorama refleja un aumento considerable de la inseguridad alimentaria con respecto a lo observado entre 2018 y 2019.

14 El *Integrated Food Security Phase Classification* (IPC) mide la inseguridad alimentaria en un momento específico y de una gravedad que amenaza vidas y/o medios de subsistencia, independientemente de las causas, el contexto o la duración. El IPC desglosa la inseguridad alimentaria en 5 fases: mínima, acentuada, crisis, emergencia y hambruna. La información del IPC solo está disponible para Guatemala, Honduras y el Salvador. **Inseguridad alimentaria acentuada:** Los hogares tienen un consumo de alimentos mínimamente adecuado, pero no pueden permitirse determinados gastos no alimentarios esenciales sin recurrir a estrategias de afrontamiento de la precariedad. **Situación de crisis:** Los hogares experimentan

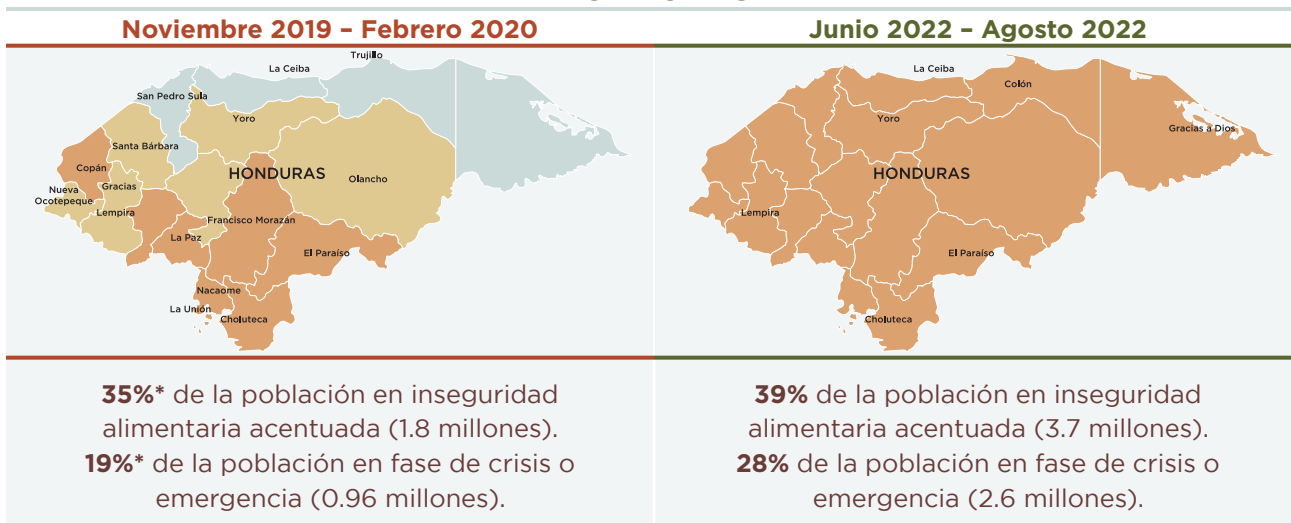
irregularidades en el consumo de alimentos, que se traducen en una malnutrición aguda elevada o más de lo normal, o apenas pueden satisfacer las necesidades alimentarias mínimas, y únicamente pueden hacerlo mediante el agotamiento de los medios de vida esenciales o a través de estrategias de afrontamiento de crisis. **Situación de emergencia:** los hogares enfrentan irregularidades en el consumo de alimentos que se refleja en desnutrición aguda y exceso de mortalidad muy elevadas y son capaces de mitigar estas brechas solo recurriendo a estrategias de sobrevivencia y a liquidación de activos. Ver más detalle en: <https://www.ipcinfo.org/>

FIGURA 12: Seguridad alimentaria por fases en Guatemala, Honduras y El Salvador

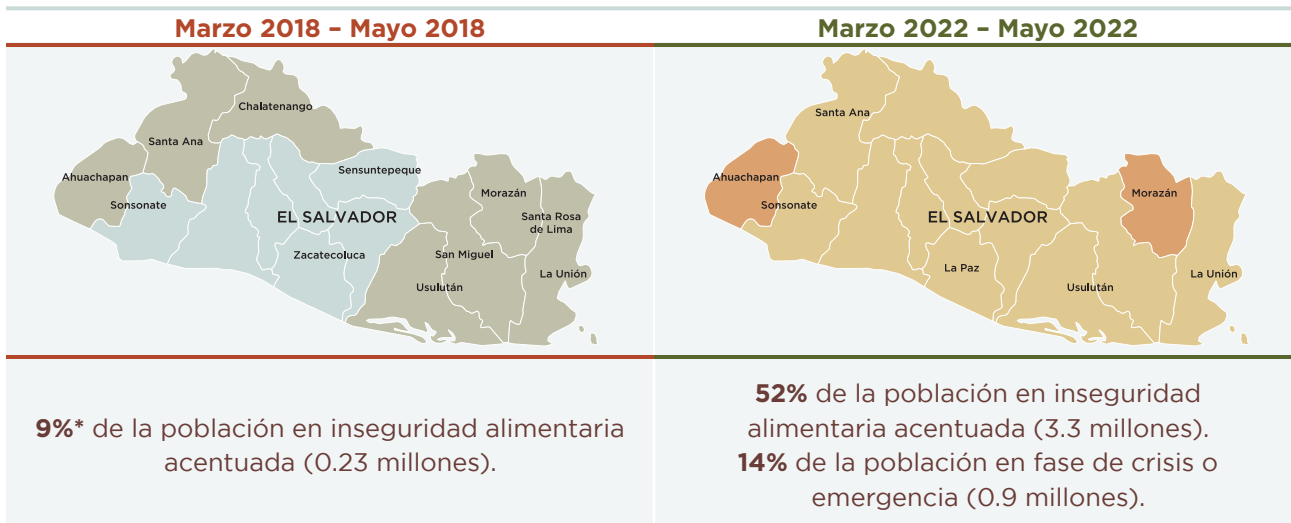
GUATEMALA



HONDURAS



EL SALVADOR



FUENTE: INTEGRATED FOOD SECURITY PHASE CLASSIFICATION (IPC).

*NOTA: COBERTURA PARCIAL DEL PAÍS.

El color celeste representa las zonas en fase 1; el color crema las zonas en fase 2 y el color naranja las zonas en fase 3. Las áreas grises son aquellas sin información.

Los impactos del COVID-19 y la escalada inflacionaria reciente se han convertido en las principales preocupaciones de los hogares y sus efectos son sentidos con mayor intensidad por los segmentos de menores ingresos.

De acuerdo con encuestas de opinión, entre el 30% y el 40% de los hogares en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá, señala que su principal preocupación es falta de dinero para cubrir las necesidades básicas, en una proporción que ha ido en aumento (Figura 13)¹⁵. Desde 2021, el porcentaje de hogares que siente que el costo de vida ha aumentado se ha acelerado, y a mediados de 2022, más del 70% de los hogares en Costa Rica y Guatemala siente el impacto de los mayores precios¹⁶.

Asimismo, la inflación se ha posicionado como la principal preocupación de los ciudadanos en la mayoría de los países de ALC, incluidos los de CAPARD. Entre fines de 2021 e inicios de 2022, el porcentaje de personas que indicó que la inflación es su principal preocupación se duplicó en Honduras, Nicaragua y Panamá (de 10% a 20%, respectivamente)¹⁷. Además, la seguridad alimentaria de un porcentaje importante de hogares en CAPARD y México se ha visto afectada con menos recursos para la compra de alimentos, reducción de comidas diarias y la necesidad de recurrir a medidas de mitigación (Recuadro 1).

Dado que el peso del gasto en alimentos disminuye con los ingresos, los estratos de menores ingresos terminan siendo los más afectados por la inflación de alimentos. En un ejercicio hecho para El Salvador, pero que se replica para otros países, se observa que el quintil más bajo de ingreso destina entre un 45% y un 50% de su gasto en consumo a alimentos, mientras que el quintil más rico destina entre

35% y 40% a estos productos. En efecto, proyecciones de la CEPAL para 2022 para ALC muestran que el quintil más pobre de ingresos experimentará una inflación de 8.3%, mientras que para el quintil más rico sería de 7.3%¹⁸.

Las mujeres, hogares rurales y trabajadores informales son más propensos a caer en pobreza como resultado del choque, agudizando la desigualdad.

De hecho, entre 2019 y 2022 ya se observan aumentos en el porcentaje de población que percibe un ingreso inferior al precio de la CBA, según estimaciones propias con base en información de las encuestas de hogares. Se estima que, en 2022, el 32% de los hogares en la región tenga ingresos menores al costo de la CBA, lo que representa un aumento de alrededor de 5.3 puntos porcentuales con respecto a 2019.

Entre los grupos más afectados se encuentran principalmente los hogares donde el jefe de hogar es mujer, o trabajador informal y hogares en zonas rurales (Figura 14). En el periodo 2019-2021, la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave en mujeres en CAPARD, México y Haití era 8 puntos porcentuales superior a la de los hombres. En consecuencia, es de esperar que la pobreza y la desigualdad se incrementen a consecuencia del choque inflacionario.

Entre 2007-2017, la reducción de la desigualdad en la región fue 30% menor a la estimada debido a los efectos inflacionarios¹⁹. El desproporcionado impacto distributivo de la inflación aumenta el riesgo de conflictividad social, que ya se observa en casos como Haití y Panamá, acentuado la inseguridad alimentaria en acceso, disponibilidad y estabilidad. Además, las mujeres que laboran en agricultura son todavía más vulnerables a caer en la pobreza

15 Fuente: CID-Gallup. La opinión pública en la región. Corresponde a la pregunta: ¿Cuál es la principal preocupación que tiene usted y su familia?

16 Fuente: CID Gallup. 2020 corresponde al último dato disponible y 2021 corresponde al dato promedio del año.

17 Fuente: IPSOS y CID-Gallup (para Centroamérica).

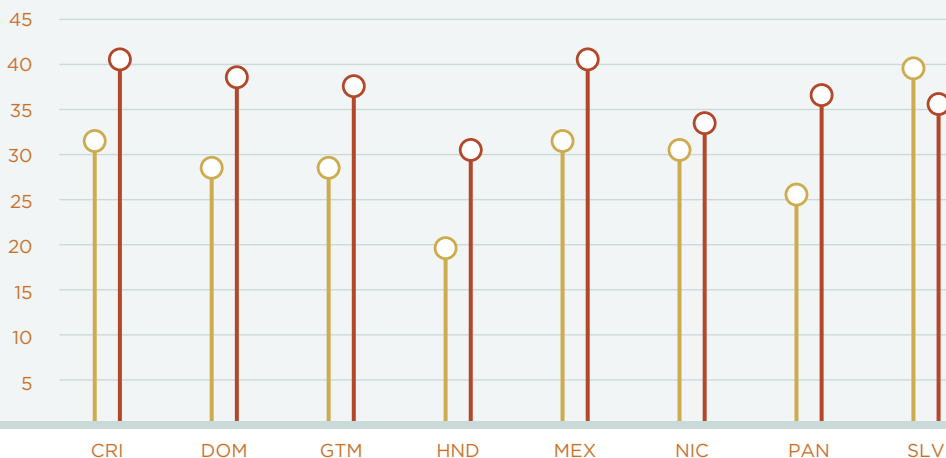
18 Fuente: CEPAL. Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania: ¿cómo enfrentar esta nueva crisis? Junio 2022.

19 Fuente: Garcimartin, C., Astudillo, J., y A. Martinez. *Inflation and income distribution in Central America, Mexico, Panama and the Dominican Republic*. Review of Development Economics. Volume 25, Issue 1. 2020.

FIGURA 13: Principal preocupación en el hogar en 2022: El costo de cubrir las necesidades básicas/no alcanza el dinero (%)

— ENERO 2022
— MAYO 2022

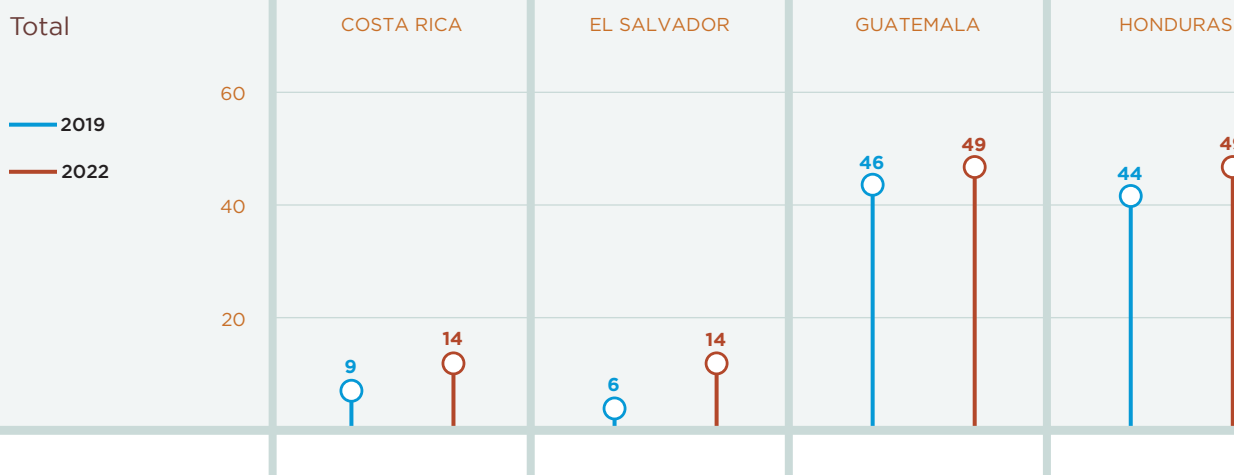
FUENTE: CID GALLUP.



tras un choque económico, dada su menor productividad, resultado de un menor acceso a propiedad de tierra, financiamiento, insumos agrícolas y asistencia técnica. Por ejemplo, la productividad de las tierras agrícolas trabajadas por mujeres se estima un 25% menor que aquellas aradas por hombres²⁰, a pesar de la elevada contribución de las primeras a la producción y el empleo en el sector.



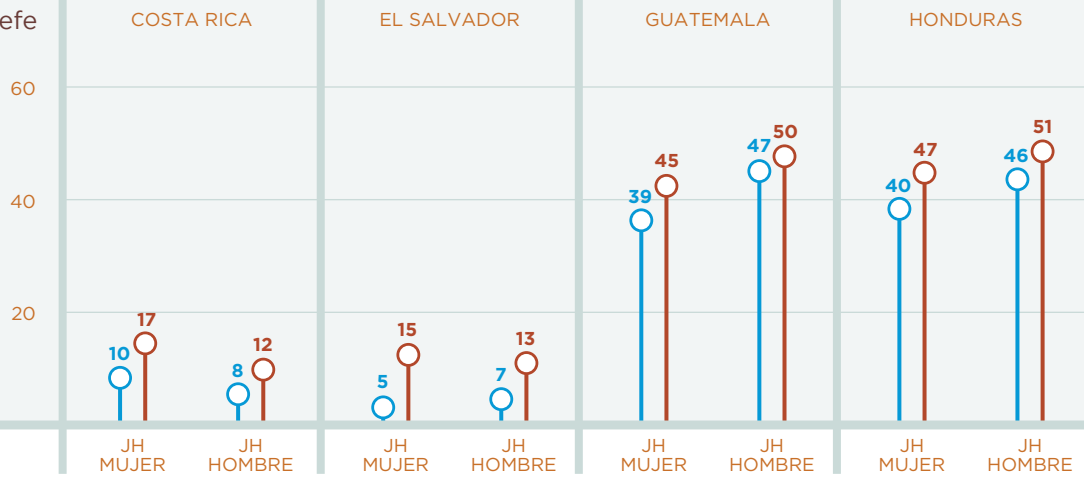
FIGURA 14: Porcentaje de hogares con ingresos por debajo del costo de la canasta básica alimentaria, total y desagregado por características del jefe del hogar y del hogar (%)



20 Peterman, Amber; Behrman, Julia y Quisumbing, Agnes. 2010. A review of empirical evidence on gender differences in nonland agricultural inputs, technology, and services in developing countries. IFPRI discussion papers 975. International Food Policy Research Institute (IFPRI).

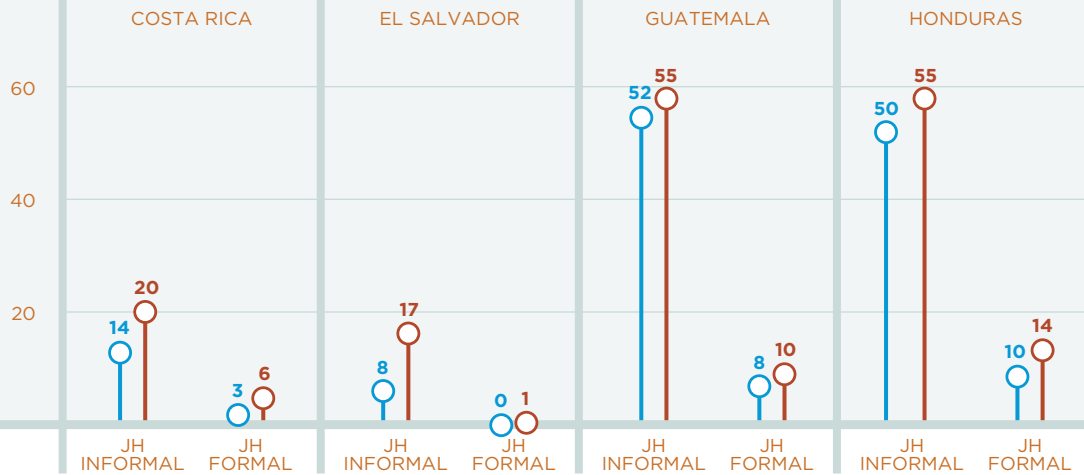
Por género del jefe del hogar (JH)

— 2019
— 2022



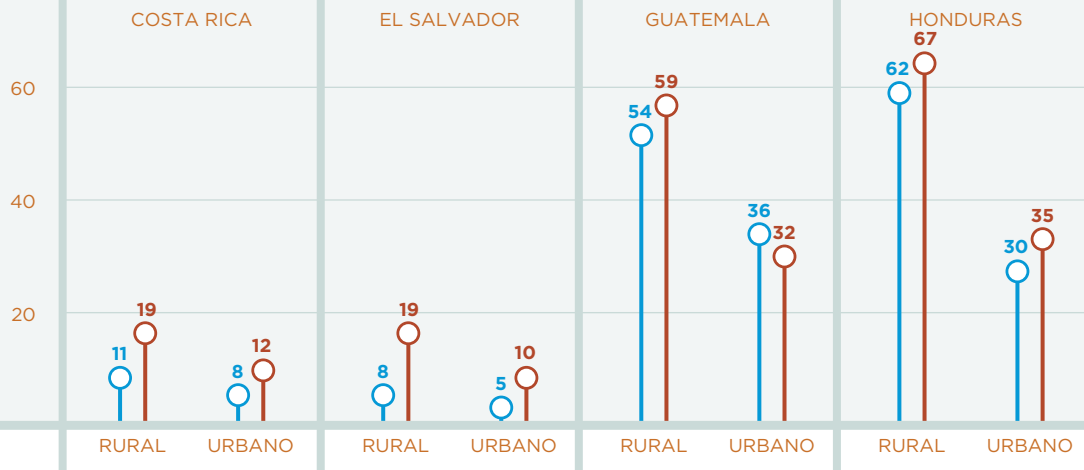
Por condición laboral del JH

— 2019
— 2022



Por zona de residencia

— 2019
— 2022



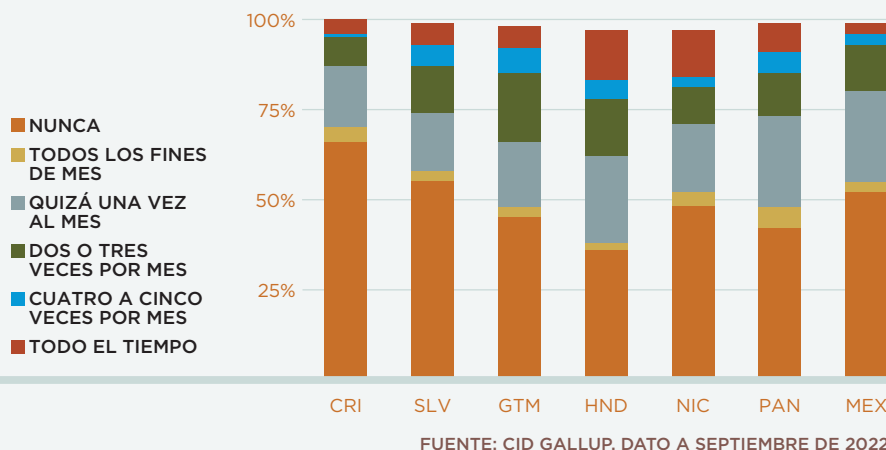
FUENTE: Cálculos propios. Para este ejercicio, se consideran todos los ingresos, monetarios y no monetarios, laborales y no laborales de los hogares, reportados en las respectivas encuestas de hogares. Se toma el precio de la CBA de mitad del 2019 y se calcula con las encuestas del 2019 el porcentaje de hogares que tienen ingreso por debajo del costo de la CBA. Se hace el mismo cálculo para 2022 utilizando encuestas del 2021 y el último precio de la CBA, salvo para Honduras donde se utiliza la encuesta del 2019 donde se ajustan los ingresos por el aumento de ingresos nominales del país entre 2019 y 2022, y un dato de precio de CBA de 2021, ajustado por la inflación acumulada de alimentos de 2022.

RECUADRO 1: Resultados de las encuestas de opinión pública sobre seguridad alimentaria

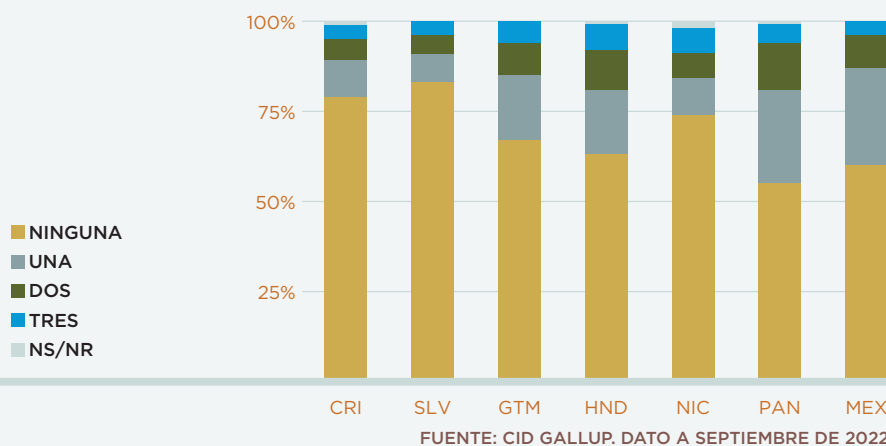
Los mayores costos de los alimentos han repercutido en la capacidad de compra de los hogares, y con ello en la cantidad de alimentos consumidos por las familias diariamente. Según información de las encuestas de opinión pública elaboradas por CID-Gallup, a septiembre de 2022, más del 30% de los entrevistados en CAPARD y México señaló que no tuvo dinero para comprar comida para la familia al menos una vez al mes en el último año. Como resultado, entre un 20% y un 40% de las personas encuestadas declaran haber reducido al menos una comida al día en los últimos 4 meses.

Frente a la falta de dinero, entre un 40% y 60% de los hogares tomó medidas para suavizar el consumo de alimentos de su familia. De entre los que lo hicieron, la mayoría de los hogares recurrió al crédito. Otras opciones utilizadas fueron: (i) la reducción de gastos importantes como el gasto en salud, lo que puede tener consecuencias en el largo plazo en el bienestar de los miembros del hogar; (ii) la venta de activos, como herramientas de trabajo, con potenciales impactos sobre el empleo y los ingresos familiares; (iii) buscar fuentes externas de alimentos, entre otras. Aunque no se ha medido de forma directa, es de esperar que las familias que han visto reducida la cantidad de comidas consumidas también hayan visto comprometida de calidad de su alimentación, extendiendo la problemática a otras dimensiones de la inseguridad alimentaria.

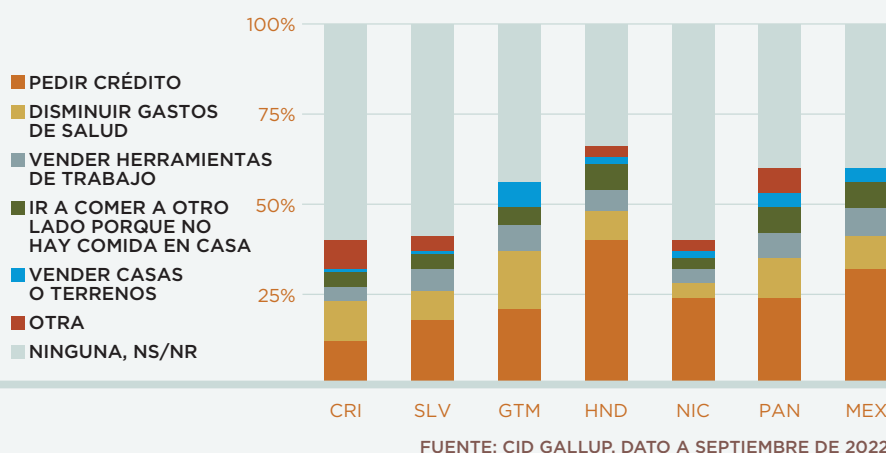
No tuvo dinero para comprar comida para la familia en los últimos 12 meses



Comidas al día se han reducido en su hogar en los últimos 4 meses



Medidas que ha tenido que recurrir para poder satisfacer las necesidades de alimentación de su familia



II. Respuestas de política

LOS PAÍSES DE LA REGIÓN ADOPTARON DIVERSAS MEDIDAS DE POLÍTICA PARA MITIGAR LOS IMPACTOS DE LA INFLACIÓN GLOBAL.

Los países de la región respondieron al choque de precios de alimentos en diferentes magnitudes (Tabla 1). República Dominicana y Guatemala reaccionaron con una amplia gama de medidas, mientras que en Nicaragua, Belice, Costa Rica, Honduras y Panamá las respuestas fueron más acotadas. A pesar de esta heterogeneidad, existen ciertas similitudes en los tipos de política implementadas (el detalle de las respuestas de política se puede consultar en las notas de país en el Anexo):

- Los controles o el congelamiento de precios y el subsecuente otorgamiento de subsidios para compensar por los mayores costos de producción se convirtieron en las herramientas más utilizadas, adoptada en 9 de los 10 países de la región a pesar de los agotados espacios fiscales que dejó la pandemia. Entre los subsidios con mayor costo fiscal se encuentran los otorgados al sector transporte y energéticos asociados al mayor precio de los combustibles. La mayor parte de estos subsidios fueron generalizados y no focalizados²¹.
- El apoyo directo, tanto monetario como en especie, al sector agrícola para estimular la producción local también fue una medida común, adoptada en 7 de los 10 países de la región.
- Los recortes de impuestos fueron utilizados en la mayoría de los países (7 de 10 países), principalmente los aranceles a la importación de productos específicos de la canasta alimentaria, así como reducciones en los impuestos indirectos, especialmente selectivos a los combustibles.
- También importantes en 4 de los países de la región fueron los apoyos a los hogares en la forma de bonos y transferencias monetarias, en su mayor parte no condicionadas, sea bajo los programas de seguridad social existentes o a través del otorgamiento de bonos extraordinarios.
- Igualmente, las medidas de apertura comercial, como la facilitación de importación de alimentos básicos y la remoción de barreras al comercio fueron solo implementadas en 4 países.
- Tres países otorgaron transferencias en especie a hogares o apoyaron el abastecimiento directo de alimentos.
- En Haití, se elevó el salario mínimo de manera unilateral con miras a mejorar la capacidad de acceso de los hogares a los alimentos.

21 Ver detalles de las medidas gubernamentales de alivio del aumento del precio de los combustibles y sus impactos fiscales en Garcimartín, C. y J. Roca. 2022. Impacto fiscal y distributivo de las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis energética en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Nota Técnica No. IDB-TN-2588.

Los costos fiscales de las respuestas de política se representan 1.2% del PIB en promedio para la región.

Dichos costos corresponden a estimados en los paquetes, planes de medidas o presupuestos

aprobados por los gobiernos considerando los plazos originalmente planeados²². Es de destacar la heterogeneidad entre países, con costos que van desde 0.1% (Costa Rica) hasta 2% del PIB (México). En Honduras, República Dominicana, El Salvador y Nicaragua los impactos fiscales se encontraron entre 1.3% y

1.8% del PIB. A pesar del costo fiscal, se considera que, en general, las medidas adoptadas tuvieron carácter compensatorio y hasta el momento no han tenido mayor impacto en la inflación de alimentos. El detalle de las respuestas de política se puede consultar en las notas por país (Anexo).

TABLA 1: Medidas implementadas para mitigar el efecto de la inflación en la seguridad alimentaria

MEDIDA	BEL	CR	ES	GU	HO	HA	MEX	NIC	PAN	RD	TOTAL
Fiscales											
Transferencias en efectivo a hogares vulnerables		x		x		x				x	4
Transferencias en especie (vales de alimentos, comedores, alimentos escolares, entre otros)				x	x				x		3
Recortes de impuestos	x	x	x		x		x		x	x	7
Recorte de gastos para generar espacio fiscal						x					1
Comerciales											
Facilitación de importaciones			x	x			x			x	4
Precios y salarios											
Controles o congelamiento de precios/subsidios/mecanismos de estabilización	x	x	x	x	x		x	x	x	x	9
Aumento del salario mínimo						x					1
Reales											
Apoyo al sector agrícola (semillas, fertilizantes, apoyo a campaña agrícola, capacitación, financiamiento, entre otros)	x		x	x	x	x	x			x	7
Apoyo a la comercialización y abastecimiento de alimentos (por ejemplo, reservas estratégicas de alimentos)				x			x			x	3
Apoyo de donantes						x		x		x	3
No. de medidas	3	3	4	6	4	5	5	2	3	7	
COSTO FISCAL (% PIB)	1.2%	0.1%	1.6%	0.5%	1.8%	0.8%	2.0%	1.3%	ND*	1.5%	1.1%

22 Con excepción de Honduras, donde también se incluye el costo de algunas medidas ejecutadas a la fecha de preparación de este documento (ver detalle en la nota por país en el Anexo).

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

*Para Panamá no se dispone de información completa sobre el costo fiscal de las medidas.

III. Perspectivas y recomendaciones

LAS CIFRAS RECIENTES INDICAN UNA CORRECCIÓN EN LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS ALIMENTOS, PERO LOS RIESGOS AL ALZA PERSISTEN.

Después de alcanzar un máximo histórico en marzo de 2022, el índice de precios de alimentos de la FAO bajó por sexto mes consecutivo en septiembre; no obstante, la caída es más moderada que en meses previos (-1.1% m/m en agosto frente a -8.6% en julio) y ya en Octubre el índice se mantuvo sin cambios. El principal determinante ha sido la progresiva normalización de precios de cereales que responde a factores tanto de oferta como de demanda. Por el lado de la oferta, la reapertura del comercio de granos a través del mar negro resultado del acuerdo entre Rusia y Ucrania firmado en julio y recientemente extendido por 4 meses, mejores cosechas y la apreciación del dólar abaratan el precio de dichos insumos, mientras que las perspectivas de una desaceleración económica global disminuyen la demanda de estos productos a nivel mundial. Sin embargo, el acuerdo entre ambos países es monitoreado con cautela por la comunidad internacional y, de continuar el conflicto o tornarse más violento, los precios de los alimentos podrían volver a elevarse, así como el del petróleo y gas natural, insumo clave para la producción de fertilizantes. Finalmente, restricciones a la exportación de trigo y arroz impuestas en India, clave proveedor mundial, debido a condiciones climáticas puede seguir afectando la seguridad alimentaria global.

Las proyecciones de precios de insumos energéticos y alimentarios se mantienen por encima de los niveles observados antes de la pandemia.

En la segunda mitad de 2022 las cotizaciones internacionales de materias primas como petróleo, maíz y trigo experimentaron una disminución de entre 12% y 30% con respecto a los altos niveles observados en el primer semestre del año, mientras que el precio del gas natural todavía no evidencia una normalización. La corrección continuaría en 2023, pero proyecciones recientes sugieren que se mantendrían por encima del precio promedio pre-pandemia de 2017-2019 (Tabla 2 y Figura 15). Similarmente, los precios de los fertilizantes se mantienen en niveles históricamente elevados, y los riesgos al alza persisten, derivados de altos costos de los insumos, en especial energía, el desarrollo del conflicto entre Rusia y Ucrania, restricciones a la exportación en China, entre otros factores

Los desastres y el cambio climático agravan la situación de inseguridad alimentaria.

Para el segundo semestre de 2022, la inseguridad alimentaria se habría agravado, en particular en el “corredor seco” centroamericano, iniciándose una fase de crisis para los hogares más pobres de Honduras y Guatemala, quienes ya sufrieron pérdidas agrícolas significativas en 2021 afectados por los huracanes Eta y Iota de fines de 2020. A medida que avanza la temporada de escasez, las oportunidades laborales disminuirían, reduciendo los ingresos y, con ello, las posibilidades de acceso a alimentos.

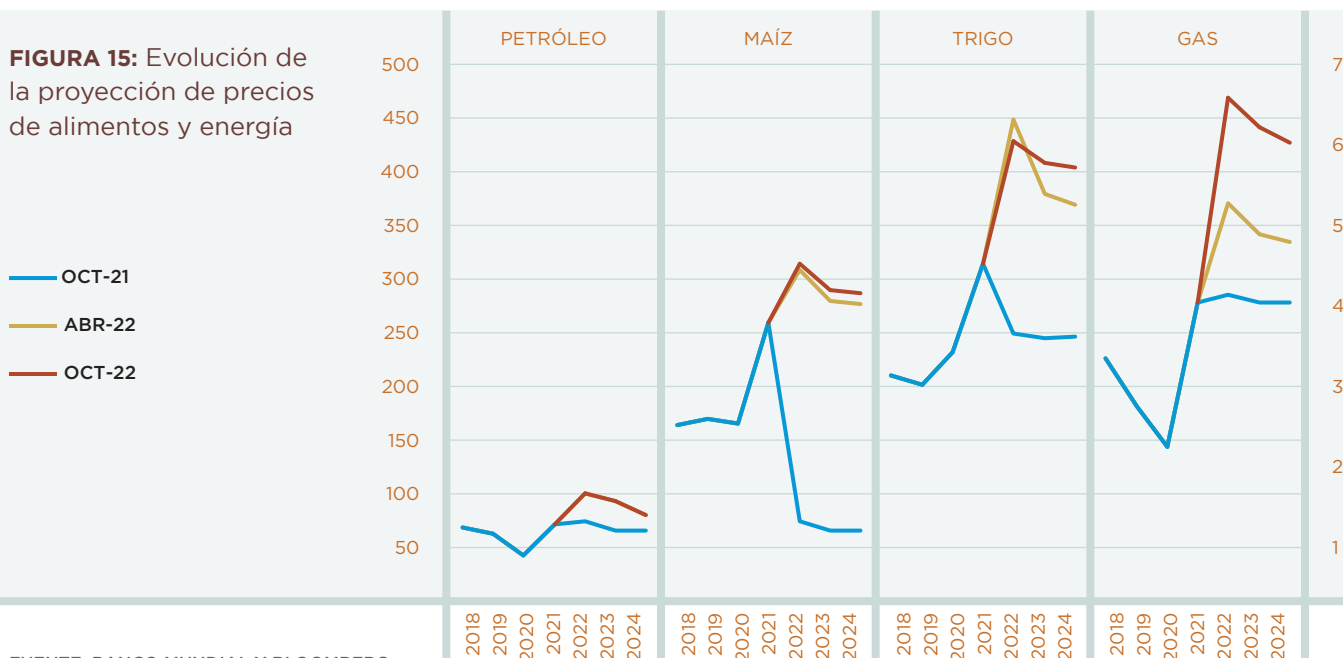
TABLA 2: Proyección de precios de *commodities* y alimentos

PRECIO DE ALIMENTOS Y ENERGIA (PROMEDIO ANUAL EN US\$)

	Promedio	Proyección	
	2017-2019	2022	2023
Petróleo WTI (US\$/barril)	58	100	92
Gas (US\$/mmbtu)	2.9	6.6	6.2
Maíz (US\$/mt)	163	315	290
Trigo (US\$/mt)	195	430	410

FUENTE: FUENTE: BANCO MUNDIAL, *COMMODITY PRICE FORECASTS* (OCTUBRE 2022)

FIGURA 15: Evolución de la proyección de precios de alimentos y energía



FUENTE: BANCO MUNDIAL Y BLOOMBERG.

Preservar la seguridad alimentaria requiere de respuestas de corto plazo ante la ocurrencia de crisis.

En caso de ocurrir una crisis alimentaria, se precisará brindar apoyo los sectores más afectados. El choque de precios de *commodities* actual-el tercero en los últimos 20 años²³- llega

23 FMI. 2022. *Fiscal Policy for Mitigating the Social Impact of High Energy and Food Prices*. Note 2022/001.

en un momento en que el espacio para políticas fiscales contracíclicas que alivien a los hogares vulnerables es sumamente limitado y las políticas monetarias restrictivas podrían inducir una desaceleración mayor, dificultando el acceso a alimentos. Por ello, es importante que los apoyos gubernamentales sean temporales y estén focalizados a los segmentos de mayor necesidad. Aunque las respuestas óptimas son particulares a las condiciones de cada país, se pueden establecer algunas recomendaciones generales:

Por el lado de la demanda:

- A. Apoyar el acceso a alimentos **fortaleciendo las redes de seguridad social**, a través de transferencias en efectivo condicionadas o no condicionadas. Las redes de seguridad social en los países de la región poseen falencias de cobertura o de focalización, por lo que aumentar tanto el margen intensivo (incrementando el monto de las transferencias) como extensivo (aumentando el número de beneficiarios) debe hacerse de la mano con mejoras en los mecanismos administrativos, de focalización y cobertura. Las restricciones presupuestarias post-pandemia requerirán que los programas sean dirigidos a las poblaciones en mayor riesgo de caer en la pobreza o ahondarse en ella por la coyuntura actual, con especial énfasis en mujeres, minorías y migrantes, así como poblaciones de difícil alcance en zonas rurales. La simplificación de los procedimientos de entrega de las ayudas y la búsqueda de soluciones innovadoras, siguiendo la experiencia de utilización de herramientas digitales dejada por la pandemia, permitirá una mayor eficiencia y efectividad de la política.
- B. **Crear sistemas de información y sinergias entre los sistemas existentes** para identificar a la población que se encuentre en riesgo de inseguridad alimentaria y realizar un targeting rápido y adecuado para la expansión vertical y horizontal de los programas de protección social.
- C. **Complementar las transferencias en efectivo con otras opciones** que se consideran efectivas para apoyar la demanda y el acceso a alimentos como son los **food vouchers**²⁴ que, al estar dirigidos únicamente a la compra de alimentos, mitigan posibles efectos inflacionarios.

- D. **Reforzar los programas de provisión de alimentos**, como los comedores populares, programas nutricionales para niños en edad escolar, y programas de entrega de productos básicos a segmentos vulnerables.

Por el lado de la oferta:

- A. Apoyar la producción local de alimentos a través de **asistencia técnica** a pequeños productores agrícolas, que permita sostener el autoconsumo y la generación de ingresos.
- B. Reducir las restricciones de liquidez de pequeños y medianos agricultores a través de la entrega de **vouchers agropecuarios** que permitan el acceso a financiamiento para fertilizantes y otras inversiones de pequeños agricultores bajo mecanismos de mercado, aliviando las restricciones de liquidez y permitiéndoles mantener sus ciclos de producción normal en la medida de lo posible.
- C. **Diversificación de la producción local**, de las fuentes de abastecimiento de alimentos en los mercados internacionales, y de las fuentes de abastecimiento de insumos agrícolas.
- D. Impulsar la **capacidad de producción local de fertilizantes y el uso eficiente de los mismos**, incluyendo el fomento de la producción de fertilizantes alternativos y orgánicos.
- E. **Reducción temporal de tarifas de importación y otros impuestos a alimentos básicos e insumos agrícolas**, medida que ha sido tomada en varios países de la región y que dependerá del espacio fiscal existente en cada país, enmarcándose preferentemente en estrategias más amplias de facilitación comercial y promoción de inversiones en el sector.

24 BID. 2018. *Food Security Sector Framework Document*.

F. Donde los espacios fiscales son mínimos o inexistentes y las condiciones de inseguridad alimentaria sean severas, **el involucramiento de donantes, agencias de desarrollo u organizaciones no gubernamentales (ONGs)** en el financiamiento y apoyo a programas de seguridad alimentaria o incluso en la provisión directa de alimentos y/o insumos agrícolas se convierte en una alternativa viable.

Las medidas aquí mencionadas son más aconsejables que: (i) los recortes de impuestos generales y sin fechas de expiración establecidas, (ii) los controles o topes de precios que introducen distorsiones a la operación de los mercados y tienen un costo fiscal elevado, (iii) los subsidios generalizados que, además de imponer un costo fiscal importante, pueden terminar siendo regresivos al beneficiar proporcionalmente más a los hogares de mayores ingresos²⁵, o (iv) las restricciones al comercio, las cuales agravarían una potencial crisis alimentaria.

Además de medidas de corto plazo, se precisan de políticas estructurales que refuercen los sistemas alimentarios y prevengan crisis futuras.

Además de las medidas de corto plazo, la pandemia y el contexto inflacionario han puesto en evidencia la necesidad de adoptar políticas con un enfoque más estructural, como las siguientes:

A. Impulsar inversiones en bienes públicos, como infraestructura de transporte rural con enfoque en vías rurales, infraestructura sostenible y resiliente al cambio climático, irrigación, propiedad de tierras, acceso a información, entre otros.

B. Cerrar las brechas de acceso al crédito para el sector agropecuario, que permitan

financiar inversiones productivas, como tecnologías para una agricultura climáticamente inteligente, así como investigación, desarrollo e innovación en el sector en áreas como el uso eficiente de fertilizantes, mitigación y adaptación al cambio climático, calidad de suelos, entre otros. Esta política debe diseñarse con un enfoque de género y diversidad, considerando la brecha de inclusión financiera de mujeres y poblaciones en zonas rurales.

C. Reforzar las redes de innovación e investigación agrícola con la participación de instituciones líderes a nivel internacional.

D. Promover la apertura al comercio internacional para aumentar la disponibilidad de alimentos cuando ocurra una emergencia o condiciones que afecten el abastecimiento local. Ello puede lograrse reduciendo las barreras tanto arancelarias como no arancelarias a productos básicos de la canasta alimentaria. Las tarifas arancelarias promedio a los cereales en CAPARD (11.7%) son mayores al promedio de ALC (7.3%)²⁶. La facilitación del comercio también pasa por eliminar barreras no arancelarias facilitando los requerimientos necesarios para importar insumos básicos. Algunos países de la región han tomado medidas en este sentido (ver Anexo). La implementación de estas medidas debe tomar en consideración los efectos netos que dichas barreras tienen en los consumidores de menores ingresos, entre otros aspectos.

E. Incentivar la participación del sector privado en el acceso y disponibilidad de alimentos de calidad, removiendo barreras que distorsionan el libre funcionamiento de los mercados y con un monitoreo

25 Garcimartín, C. y J. Roca (2022). Impacto fiscal y distributivo de las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis energética en Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

26 Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC). Corresponde a las tarifas Nación Más Favorecida (MFN) de 2020.

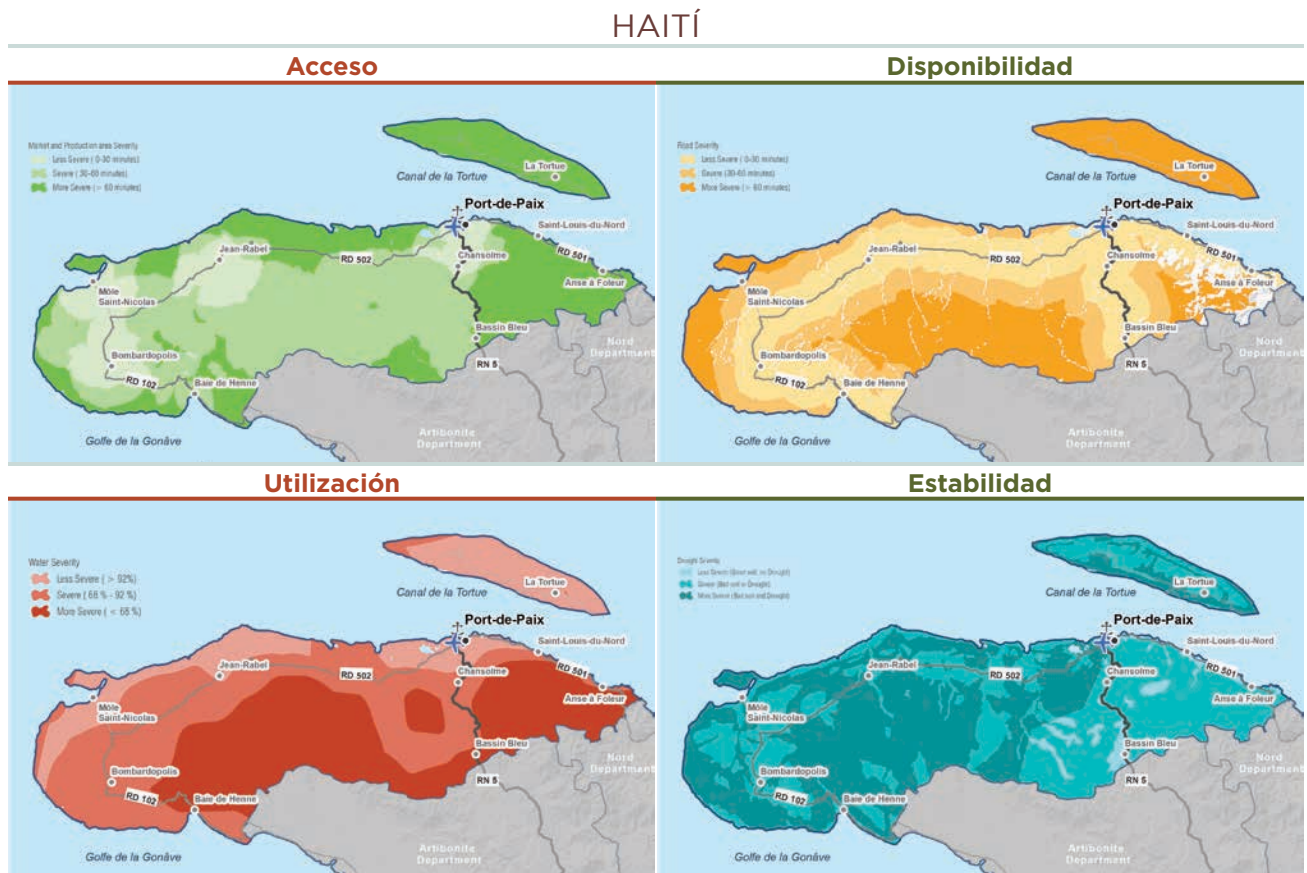
adecuado de la calidad de la oferta alimentaria.

F. Desarrollar sistemas de información alimentaria para generar alertas tempranas ante posibles crisis alimentarias y hacer seguimiento de hotspots de inseguridad alimentaria. En los países donde existan restricciones de información, la utilización de soluciones georreferenciadas puede brindar información granular de las áreas con mayor exposición a inseguridad alimentaria y proveer insumos valiosos para las intervenciones. Por ejemplo, en Haití se identificaron geo-espacialmente áreas de inseguridad alimentaria en el noroeste del país (Figura 16), la zona con los niveles de inseguridad alimentaria más agudas del país, en cada una de sus dimensiones.

G. Otras opciones más sofisticadas son la **contratación de instrumentos de cobertura** contra el aumento de precios de alimentos, como los mercados de futuros y opciones y la contratación de seguros, instrumentos que todavía no se encuentran muy desarrollados en la región.

H. Dado que las mujeres son más vulnerables a los efectos de choques económicos y climáticos sobre la producción agrícola, la seguridad alimentaria, salud, agua y recursos energéticos, es recomendable el **apoyo al empoderamiento de las mujeres** a través del acceso a servicios integrales como financiamiento, entrenamiento, desarrollo de capacidades, oportunidades laborales para la generación de ingresos, acceso a títulos de propiedad y herramientas de transformación de los alimentos para crear valor agregado entre otros. El BID ha brindado apoyo a

FIGURA 16: Aproximación geoespacial a la seguridad alimentaria en Haití



FUENTE: GILES ALVAREZ, JEAN-BAPTISTE Y MORENO (2022). EN ELABORACIÓN

Honduras, El Salvador, México, y República Dominicana en el desarrollo de un modelo de servicios integrales para mujeres.

Los organismos multilaterales cumplen un rol clave en la preservación de la seguridad alimentaria en la región y el BID se ha posicionado como socio estratégico en este ámbito.

Los restringidos espacios fiscales herencia de los años de la pandemia reducen el margen de maniobra de los gobiernos de la región para intervenir en situación de emergencia alimentaria. Además, el carácter multidimensional de la seguridad alimentaria exige esfuerzos concertados y una óptima capacidad de ejecución. Por ello, las organizaciones internacionales cumplen un rol protagónico para movilizar recursos de socios donantes y apoyar a los gobiernos en situación de emergencia alimentaria. Los

fondos de agencias internacionales permiten financiar la adopción de medidas de corto plazo y el acceso a asistencia técnica rápida y eficaz para el diseño de políticas de largo plazo encaminadas a prevenir futuras crisis. En la región, el BID tuvo un rol importante durante la crisis de alimentos de 2008-2009 y, por sus ventajas comparativas ha consolidado su presencia en los sectores relevantes para la seguridad alimentaria en los últimos años (Recuadro 2), con un portafolio de inversiones importante y apoyando la generación de conocimiento. En los últimos años, el BID ha aprobado programas en varios países de la región -Belize, Haití, Panamá, República Dominicana- dirigidos a apoyar la sostenibilidad del sector agrícola y la producción de alimentos. Dicho posicionamiento le permite ser un aliado estratégico en la mitigación de los efectos de una posible crisis alimentaria legado de la pandemia y del actual ciclo alcista de precios de los alimentos.



RECUADRO 2: El rol del BID en la seguridad alimentaria en la región

En 2008 el Banco creó dos mecanismos para responder a la crisis generada por los precios de los alimentos.

El primero de ellos fue un mecanismo crediticio para: (i) proveer acceso expedito a préstamos para atender necesidades sociales apremiantes y proyectos de expansión de la producción; (ii) crear fondos por US\$500 millones (monto máximo de US\$50 millones por operación); y (iii) establecer un fondo renovable de hasta 20% de los montos en préstamo. El segundo fue un fondo temático estratégico para brindar asistencia rápida y eficaz de cooperación técnica no reembolsable (en 2008 se asignó una cuota de US\$15 millones). Entre 2008-2011, se utilizaron el 99% de los recursos de este fondo, de los cuales 68% fue dirigido a países pequeños y vulnerables, utilizándose la mayor parte para aumentar la disponibilidad de suministros de alimentos a través de mejoras en la producción y la productividad. Los recursos del fondo impulsaron intervenciones de largo plazo a través de 10 operaciones de préstamo.

La evaluación por parte de la Oficina de Evaluación del BID (OVE) al portafolio en el sector agropecuario indica que las intervenciones del Banco han sido relevantes para fortalecer la disponibilidad de alimentos en la región, reduciendo las barreras que limitan el aprovechamiento de su potencial productivo y comercial, y contribuyendo en varios casos a la estabilidad de alimentos en el mediano y largo plazo. Asimismo, casi 40% del portafolio del Banco ha estado enfocado en la población más pobre, apoyando el acceso a alimentos. Finalmente, existe oportunidad para fortalecer el apoyo a la utilización de alimentos.

En la coyuntura actual, el Banco cuenta con instrumentos financieros y no financieros para apoyar la seguridad alimentaria en la región, tanto en ejecución como en preparación. Además, ante la ocurrencia de una crisis alimentaria se pueden explorar alternativas como la reasignación de fondos de proyectos existentes y el otorgamiento de financiamiento contingente, como el que ha servido para apoyar a mitigar los impactos de desastres naturales y, posteriormente, de la pandemia del COVID-19. Adicionalmente, se pueden ofrecer instrumentos de rápido desembolso, complementados con asistencia técnica.

El BID cuenta con amplia experiencia para apoyar a los gobiernos en el fortalecimiento de los sistemas alimentarios mediante con estrategias de mediano plazo para evitar futuras crisis, incorporando un enfoque de cierre de brechas de género y de especial atención a las poblaciones afectadas de manera desproporcionada.

ANEXO - NOTAS POR PAÍS



BELICE

María Cecilia Deza



1. Panorama de la seguridad alimentaria

La prevalencia de la inseguridad alimentaria en Belice era superior al promedio de ALC antes de la pandemia, y la crisis sanitaria la elevó más.

Previo a la pandemia (periodo 2017-2019), la inseguridad alimentaria moderada y grave en Belice afectaba al 35.7% de la población, superior al promedio de ALC. La irrupción de la crisis sanitaria elevó esta proporción a 42% en el periodo 2019-2021. Sin embargo, el porcentaje de la población en inseguridad alimentaria grave se mantuvo estable en alrededor de 6%.

El aumento de la inseguridad alimentaria fue resultado de la caída de los ingresos en los hogares, que comprometió el acceso a los alimentos.

En 2020, el ingreso per cápita disminuyó en 20% (en dólares constantes) y el desempleo se elevó a 13.7% en el mismo año, minando el poder adquisitivo de la población. Según datos

recopilados a través de entrevistas telefónicas realizadas por el Banco Mundial en 2021: (i) el 50% de los hogares beliceños declararon haberse quedado sin alimentos en el mes anterior, y (ii) el 21% de los hogares pasaban un día sin comer, por falta de dinero. Asimismo, según la Encuesta Caribeña de Impacto en la Seguridad Alimentaria y los Medios de Vida del COVID-19, entre abril de 2020 y febrero de 2021, la proporción de personas que declaran saltarse comidas aumentó del 24% al 37%, los hogares sin reservas de alimentos o con reservas para menos de una semana aumentó del 28% al 75%, y el 78% de los hogares satisfizo sus necesidades alimentarias gastando sus ahorros durante la pandemia.

Los impactos de la pandemia en la seguridad alimentaria fueron mitigados por la baja dependencia de las importaciones de alimentos, mientras que la mayor producción local apoyó la disponibilidad de alimentos durante la emergencia.

La agricultura fue uno de los pocos sectores que creció durante la pandemia (+1.8% en 2020) y se recuperó con más fuerza en 2021 (+16%). De hecho, muchas personas que se quedaron sin trabajo durante la paralización prácticamente total de la actividad turística se convirtieron en agricultores. Interrupciones en la cadena de suministro global también estimularon la demanda de productos locales. En consecuencia, agricultores nuevos y existentes aumentaron la producción, lo que resultó en una abundancia de alimentos en 2021. Además, la ratio de dependencia de las importaciones de arroz y cereales es inferior al 30% y el país es exportador neto de frutas.

El reciente aumento de los precios internacionales de los alimentos y la energía agrava el problema de inseguridad alimentaria.

En línea con la tendencia global, la inflación de alimentos y bebidas en Belice llegó a 9.4% en septiembre de 2022, la cifra más alta desde la crisis alimentaria de 2006-2008 y algo inusual en Belice, un país con un tipo de cambio fijo de larga data que ha contribuido a la estabilidad de precios. Los productos con mayor incremento son el arroz, la harina y el aceite vegetal. Por su parte, la inflación en el rubro de transporte alcanzó 20%, afectando los costos de producción y transporte de bienes, incluidos los alimentos. Ambos rubros representan más del 40% de la canasta del IPC y explican tres cuartas partes de la inflación de septiembre. Más del 20% del gasto de consumo final de los hogares se dirige a alimentos, y aunque no se disponen de datos, es espera que la importancia del gasto en alimentos sea mayor en los segmentos más pobres. Como resultado, es de esperar que la tasa de pobreza haya aumentado en 2021 y 2022 (la tasa de pobreza alcanzó el 52% en 2018, frente al 41% en 2009²⁷).

27 Fuente: *Statistical Institute of Belize*

Otros indicadores del marco de seguridad alimentaria de la FAO relacionados con disponibilidad, utilización y estabilidad han mostrado una evolución más favorable pero hay evidencia de que se han visto afectados por la emergencia sanitaria y la inflación actual.

Belice está por encima de la media y la mediana de ALC en lo relativo a suministro de energía alimentaria (disponibilidad), estabilidad política (estabilidad), prevalencia de desnutrición (acceso) y acceso a servicios de agua potable y saneamiento (utilización), y variabilidad en el consumo per cápita de alimentos (estabilidad). Sin embargo, de acuerdo con información del Banco Mundial en base a las encuestas mencionadas anteriormente, durante la pandemia, el 33% de los hogares en Belice no pudo comer alimentos nutritivos o saludables, lo que indica que además del acceso, la disponibilidad de alimentos de calidad también fue afectada.

2. Respuestas de política

A inicios de 2022, el gobierno aprobó medidas económicas para apoyar a los sectores afectados por la inflación por un estimado de 1.24% del PIB.

En Belice, existen controles de precios para los alimentos básicos, como el arroz, los frijoles, el azúcar, el pan y la harina²⁸. A raíz del aumento del precio internacional del trigo y, en consecuencia, del precio local de la harina, las panaderías enfrentaron presiones para aumentar el precio de pan al consumidor final. Dado el esquema de controles de precios, el gobierno impuso un tope al precio del pan de 16 onzas, compensando la pérdida de ingresos con un subsidio directo a las panaderías. El subsidio

28 *Supplies Control (Amendment) Regulations*. Alimentos básicos también están cargados con una tasa de 0% del impuesto general a las ventas (GST, por sus siglas en inglés).

sería de 25 centavos por pieza de pan, en base a los sacos de harina utilizados en la producción. La tasa de conversión considerada es de 120 hogazas de pan por saco de harina. El programa se extendería desde junio de 2022 hasta diciembre de 2022 y se estima que se subsidiará el 70% de la producción. El costo fiscal del subsidio asciende a US\$ 0.75 millones y a la fecha se han desembolsado los subsidios de junio y julio. Para paliar las consecuencias del aumento de los precios de la energía, que impacta indirectamente en los costos de transporte de alimentos, el gobierno redujo los impuestos selectivos y las tarifas de importación, aprobó subsidios directos a operadores de transporte y turismo por 6 meses. El costo fiscal total estimado de las respuestas de política totaliza alrededor de US\$32 millones (1.24% del PIB).

También se consideraron medidas sectoriales para mitigar el impacto del incremento de precios de alimentos y de los insumos agrícolas.

Entre ellas se encuentran el reforzamiento del marco de control de precios y una mayor supervisión para asegurar la accesibilidad de los alimentos y evitar la especulación. Además, el gobierno lanzó una campaña para incentivar a los ciudadanos a sustituir insumos importados por productos locales y explotar la relación con el sector turístico. Otras medidas que se plantearon son el uso de fertilizantes y pesticidas naturales, el incentivo a la producción casera, el uso de sistemas de irrigación, el acceso a información para determinar disponibilidad de alimentos y asegurar el abastecimiento local, entre otros. Asimismo, se brindó entrenamiento a granjeros en el uso de biofertilizantes, biopesticidas, y manejo integral de control de plagas. En cuanto a apoyo de donantes, Belice firmó un seguro contra el riesgo climático y la seguridad alimentaria con el *World Food Programme* (WFP) de las Naciones Unidas por US\$100,000 anual para otorgar asistencia a poblaciones con riesgo de inseguridad alimentaria a causa de tormentas y huracanes.

Los mecanismos de atención de crisis de corto plazo son limitados dado el restringido espacio fiscal.

El país tiene una red limitada para la seguridad alimentaria, contando con un solo programa de alimentos, *Grocery Bag Program*, una fusión entre los discontinuados programas *Food Pantry* y *Food Assistance Program*, bajo el Ministerio de Desarrollo Humano, Familias y Asuntos de los Pueblos Indígenas. El programa operó en la ciudad de Belice y tuvo una cobertura aproximada del 10% de la población objetivo. El programa se suspendió después de brindar un alivio temporal durante la pandemia, junto con el programa de asistencia alimentaria COVID-19. En el presupuesto del año fiscal 2022/23, se asignaron US\$ 3 millones a asistencia alimentaria.

El país evidencia retos estructurales que inciden en la seguridad alimentaria.

A pesar de contribuir casi 10% al PIB y generar el 17% del empleo (industrias primarias), el sector agrícola en Belice es volátil, con baja productividad y altamente vulnerable a los desastres naturales y los eventos de cambio climático. La volatilidad de la producción agrícola ha sido de alrededor de 9 puntos porcentuales en los últimos 10 años y, después de crecer en los últimos dos años, en el primer semestre de 2022 ha caído 2.2% en términos interanuales. La productividad laboral agrícola es baja, con un valor agregado por trabajador 33% por debajo de la media de ALC. Finalmente, el sector agrícola es vulnerable a los desastres naturales y eventos de cambio climático, como sequías prolongadas, precipitaciones y temperaturas extremas²⁹.

29 Para mayor detalle, ver el documento del *Country Development Challenges* de Belice.

COSTA RICA

Pablo Vega y Josué Sibaja



1. Panorama de la seguridad alimentaria

La inseguridad alimentaria en Costa Rica estaba por debajo del nivel mundial y de ALC antes de la pandemia.

Según los datos de la FAO, entre 2017 y 2019, la inseguridad alimentaria moderada o grave afectaba al 14.5% de la población (724,100 personas), siendo considerada grave para el 2.4% de la población (119,300 personas). Si bien estos valores se ubican por debajo de la prevalencia a nivel mundial y de ALC, la tendencia en los últimos años es al alza (12.2% y 1.8%, respectivamente, durante el periodo 2014-2016).

La inseguridad alimentaria empeoró durante la pandemia como consecuencia del aumento del desempleo y de la pobreza.

En 2020, la contracción económica del 4.1% elevó a máximos históricos las tasas de desempleo (24.4% a nivel nacional y 40.0%

entre los hogares pobres), de pobreza (26.2%) y de pobreza extrema (7%).³⁰ Como consecuencia, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave entre 2019-2021 aumentó a 15.9% (810,800 personas), siendo la grave del 2.8% (143,500 personas), aunque manteniéndose por debajo de la prevalencia mundial y de ALC.³¹

Las presiones inflacionarias internacionales y la dependencia de las importaciones para abastecer el consumo de ciertos alimentos básicos representan los principales riesgos para la seguridad alimentaria.

La inflación anual en septiembre fue del 10.4%, impulsada por los rubros de transporte (18.2%)

³⁰ En 2019, la tasa de desempleo fue del 11.8%, la de pobreza 15.1% y la de pobreza extrema 5.8%.

³¹ Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH) de 2020, un 47.6% de los hogares del país experimentaron algún grado de inseguridad alimentaria durante 2020.

y de alimentos y bebidas no alcohólicas (20.7%). En 2022 (septiembre), el precio de alimentos básicos ampliamente consumidos, como la papa, el frijol y las harinas aumentaron un 73%, 25% y 21%, respectivamente. Por su parte, durante el periodo 2016-2018, el grado de dependencia de importación de los principales granos fue del 40% en el caso del arroz, el 66% en el frijol y el 97% en el maíz.

2. Respuestas de política

Las respuestas de política hasta la fecha han tenido un impacto fiscal del 0.1% del PIB.

Costa Rica es el país de la región que menos recursos ha destinado para contrarrestar la subida de los precios de los combustibles y de la alimentación. Hasta el momento, las medidas han tenido un bajo impacto fiscal como consecuencia de la aplicación de la regla fiscal, que limita el aumento del gasto público. Principalmente, estas medidas han consistido en decretos ejecutivos que se han centrado en cambios normativos (congelación y reducción de impuestos y eliminación de precios mínimos) y en la aprobación de un subsidio para los hogares con ingresos más bajos.

El Gobierno aprobó un subsidio destinado a las personas en situación de pobreza equivalente al 0.08% del PIB.

En agosto, el Gobierno firmó un decreto para la creación de un “beneficio por inflación” de 60.000 colones (US\$90) mensuales para 111.000 hogares en condición de pobreza, por un plazo de tres meses y prorrogable por dos más. Esta medida tendría un costo de US\$50 millones (0.08% del PIB).

Con el objetivo de rebajar el precio del arroz, se eliminó el precio mínimo y se redujo el impuesto de importación.

En agosto, el Gobierno eliminó el precio mínimo del arroz y redujo su impuesto de importación del 35% al 4%. Para compensar el impacto de estas medidas sobre los productores, el Gobierno prepara un proyecto de ley para compensar a los 440 productores de arroz del país con unos US\$4,300, por una única vez. El costo estimado de esta medida sería de US\$1.9 millones (0.003% del PIB).

El Gobierno fijó el impuesto sobre los combustibles para mitigar el incremento de los precios y prepara nuevas medidas.

En julio, el Gobierno aprobó una ley que congelaba el impuesto a los combustibles por un periodo de seis meses. El costo estimado de esta medida es de US\$22 millones (0.03% del PIB). Adicionalmente, el Gobierno presentó un proyecto de ley para fijar un precio máximo a los combustibles, sujeto a ratificación de la Asamblea. Su costo aproximado (teniendo en cuenta los precios de septiembre) sería de US\$24 millones (0.04% del PIB).

EL SALVADOR

Juan José Barrios y Alejandro Gasteazoro



1. Panorama de la seguridad alimentaria

Los indicadores de seguridad alimentaria mejoraron de 2017 al 2019, pero choques sucesivos en los últimos años, desde los inicios de la pandemia hasta el alza en el precio de los alimentos, han revertido esta tendencia.

La situación de la seguridad alimentaria tuvo una tendencia positiva antes de la pandemia COVID-19, de acuerdo con diferentes indicadores de seguridad alimentaria (calidad y acceso). Por ejemplo, la subalimentación reflejó mejoras. No obstante, los avances se han frenado con choques exógenos sucesivos, en especial, la reciente escalada de la inflación (principalmente en el rubro de alimentos). Los datos al mes de septiembre indican en su mayoría un deterioro en la situación de la seguridad alimentaria para el 2022.

El incremento de los ingresos de los hogares contribuyó a mejorar la situación de la seguridad alimentaria durante los años prepandemia.

Desde al 2016 al 2019, el porcentaje de hogares en situación de inseguridad alimentaria se redujo de 19.2% a 16%³². Lo anterior se relaciona en gran medida a que el porcentaje de hogares con ingresos inferiores al costo de una canasta básica alimentaria (equivalente a la definición de pobreza extrema) se redujo casi a la mitad, pues pasaron del 7.6% al 4.5% del total (reducción de 3,1 p.p.), según estimados oficiales³³, reflejando una mejor capacidad económica. Entre otras cosas, lo anterior pudo haber sido explicado por el incremento significativo del salario mínimo en el 2017, pues el salario en el sector agrícola incrementó a US\$200, incrementando entre 30% (industrias agrícolas de temporada) al 100% (recolección de algodón y azúcar). No obstante, los alcances de dicho incremento son restringidos debido a la cantidad importante de ocupados informales (alrededor del 70%).

32 Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples El Salvador, DIGESTYC (varios años).

33 Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples El Salvador, DIGESTYC (varios años).

Otros indicadores de seguridad alimentaria (como la subalimentación), también mejoraron previo a la pandemia.

De acuerdo con datos de la FAO³⁴, la prevalencia de la subalimentación se redujo de 10.6% en promedio durante 2014-2016 a 8.3% durante 2017-2019. Por otro lado, el porcentaje de niños menores de 5 años con retraso en el crecimiento también se redujo de 12.8% en 2016 a 11.6% en 2019. Por último, el suministro de energía alimentaria (kilocaloría por persona por día) incrementó 3.8% en el periodo 2017-2019 con respecto al periodo 2014-2016.

Existen indicios de un deterioro de la seguridad alimentaria principalmente vinculado al alza generalizada en el precio de los alimentos durante 2021-2022.

Al mes de agosto 2022, el precio de los alimentos ha tenido un incremento interanual significativo (14.5%), por encima de la inflación general (7.7%)³⁵. En contraste, en los años pre-pandemia El Salvador se ha caracterizado por una baja inflación (en gran medida relacionado con la dolarización oficial), por lo que (al menos) desde 2012 a 2021 la inflación en el rubro de alimentos nunca había superado el 6%, y el promedio en el periodo 2012-2019 fue de 1.1%. Por otro lado, aunque El Salvador tiene una de las tasas de inflación interanual a julio más baja en Centroamérica (de mayor a menor, es el sexto de siete países), la inflación en el rubro de los alimentos destaca por ser relativamente alta (el cuarto de siete países)³⁶.

La inflación global afecta los precios de varios alimentos que importa El Salvador.

34 FAO: <https://www.fao.org/faostat/es/#data>

35 Banco Central de Reserva de El Salvador: <https://www.bcr.gob.sv/bcrsite/?cdr=123&lang=es>

36 SECMCA datos: <https://www.secmca.org/params/?cid=0&scid=0&data=IPC&parent=Precios&son=%C3%8Dndice%20de%20precios%20al%20consumidor&list>

Para el periodo 2015-2019, la agricultura en El Salvador tuvo una menor importancia dentro de la producción nacional (5.4%) en comparación con la relevancia en el promedio de los demás países de CAPARD (7.8%). Lo anterior es un factor que explica el déficit en la balanza comercial en el rubro de alimentos³⁷, colocándolo como uno de los tres países de CAPARD en dicha situación. De forma más detallada, mientras que para el periodo 2015-2019 la exportación de alimentos como porcentaje de las exportaciones totales para los demás países de CAPARD representó alrededor del 40%, para el caso de El Salvador dichas exportaciones representaron el 18.6%. Por otro lado, la importación de alimentos con respecto a las importaciones totales en el periodo 2015-2019 representó alrededor del 14.4% para los demás países CAPARD, mientras que para El Salvador fue el 17.6%. Al considerar a los productos específicos de la Canasta Básica Alimentaria, la Superintendencia de Competencia (2015) identificó que el 52% del volumen de dichos productos se obtienen a través de importaciones: 93% para las verduras, 62% para cereales, 55% para las frutas y 46% para carne bovina. Al considerar el indicador de la FAO de la dependencia de las importaciones de cereales³⁸, El Salvador (51.9%) se ubica en torno al promedio regional (55.6%).

El número de personas en crisis alimentaria podría haber incrementado en más de 66 mil a mayo 2022 (del 13.3% de la población al 14.3%).

Las previsiones anteriores fueron inicialmente realizadas en septiembre 2021 por el IPC³⁹, por lo que no considera la magnitud actual del alza en el precio de los alimentos, y más bien capta la vulnerabilidad generada por el periodo estacional de sequía que caracteriza

37 WITS-Comtrade.

38 Evalúa cuánto de la disponibilidad de cereales alimenticios proviene de importaciones, y se calcula como: (importaciones - exportaciones) / (producción interna + importaciones - exportaciones).

39 <https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1155106/>

a la región y que afecta al sector agrícola (ver definición del “corredor seco” proporcionado más adelante). De tal forma, debido al actual alza en el precio de los alimentos es probable que el incremento en el número de personas en situación de inseguridad alimentaria sea mayor. En un análisis realizado más recientemente (el 7 de julio de 2022) por el mismo organismo, focalizado en un área fronteriza entre El Salvador, Guatemala y Honduras, se pronosticó que el número de personas en situación de crisis o emergencia alimentaria se duplicaría (del 15% de la población al 29%)⁴⁰.

Las sequías son otro factor relevante que incide en la inseguridad alimentaria.

De acuerdo con la FAO, el “corredor seco” se trata de una zona que incluye a partes del territorio de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, agrupando a un aproximado de 10 millones de personas, en la que muchas se dedican a labores agrícolas. Esta zona es altamente vulnerable, pues se caracteriza por periodos largos de sequía alternado con otro de fuertes lluvias. Esta situación genera una pérdida significativa de cultivos debido a las condiciones climáticas extremas, agravadas por el cambio climático. Por ejemplo, debido al fenómeno climático “El niño” que genera más sequía (pero también podría agudizar la ocurrencia de lluvias en un menor periodo de tiempo) se estimaron pérdidas de hasta el 60% de la producción de maíz en el 2015⁴¹. Por ello El Salvador se ubica en la posición 28 entre 180 países en el Índice de Riesgo Climático Global 2021⁴². Esto es agravado por el hecho de que El Salvador es uno de los países de la región con el menor porcentaje de tierras cultivables equipadas para el riego (6.3%), en comparación con

el promedio de 24% en la región⁴³. Por otro lado, acuerdo con el IV Censo Agropecuario 2008, alrededor del 82% de los productores agrícolas realizan una actividad de agricultura de subsistencia, caracterizadas por emplear principalmente a personas que forman parte del mismo núcleo familiar y por destinar la producción al autoconsumo. Esto coloca a estas personas en una mayor situación de vulnerabilidad en caso de pérdidas de cosechas.

Vulnerabilidades adicionales se relacionan con una posible ralentización económica de Estados Unidos.

La economía de Estados Unidos ha tenido rasgos de una ralentización desde inicios de 2022 que podría ser agudizada por los recientes incrementos en las tasas de interés de referencia por la Reserva Federal. Esto afectaría a El Salvador, dada la fuerte relación con Estados Unidos por flujos comerciales y de remesas.

2. Respuestas de política

Desde marzo se han implementado medidas por un coste estimado de US\$513.8 millones (1.6% del PIB).

Las primeras medidas fueron aprobadas el 13 de marzo, y se pueden dividir entre medidas con un impacto directo sobre la seguridad alimentaria, y otras con un efecto indirecto. Las medidas que directamente contribuyen al objetivo de seguridad alimentaria incluyen la provisión de insumos y apoyo al sector agrícola y medidas comerciales. Entre las medidas consideradas por las autoridades como indirectas, se encuentran el congelamiento de los precios de los combustibles y al gas.

40 <https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1155391/?iso3=SLV>

41 FAO: <https://www.fao.org/americas/prioridades/corredor-seco/es/>

42 Germanwatch: https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202021_2.pdf

43 FAOSTAT.

El coste de las medidas directas se estima en US\$63.8 millones (0.2% del PIB).

Las medidas directas son de dos tipos: primero, refuerzos presupuestarios de programas creados desde gobiernos anteriores relacionados con la entrega de paquetes con semillas a fin de incrementar la producción de granos básicos, y, segundo, medidas para incrementar la importación de productos agrícolas a través de reducción de aranceles y requerimiento de permisos. Las medidas se describen con mayor detalle a continuación.

- A.** A través de tres refuerzos presupuestarios se incrementó el monto del programa de paquetes agrícolas para aumentar la producción de granos básicos (compra y entrega de semillas mejorada de frijol, maíz, fertilizantes, entre otros). Para el refuerzo de dicho programa se han aprobado US\$45.8 millones en total (22 de marzo, 11 de mayo y 14 de junio), que serían adicionales al presupuesto votado que fue de US\$19.3 millones. En contraste, en el 2019 el presupuesto para dicho programa fue US\$25.6 millones;
- B.** Se eliminó Derecho Arancelario a la Importación (DAI) y algunos requisitos de importación para diversos productos hasta marzo 2023: desde marzo, para 20 productos de la canasta básica (azúcar, frijol, maíz, harina de maíz y trigo, entre otros), y desde junio para la carne de res, que se estima representan un coste fiscal de US\$18 millones. No obstante, dado que una gran parte de los productos anteriores son importados de países que conforman el Mercado Común Centroamericano o de otros países con tratados de libre comercio, la reducción de aranceles no implica un incentivo económico significativo. Más bien, esta medida tiene el potencial de fomentar importaciones de otras regiones, y favorece la existencia de una mayor oferta de productos al reducir el requerimiento de permisos.

Las medidas que indirectamente contribuyen al objetivo de seguridad alimentaria son el subsidio a los combustibles y al gas (US\$450 millones, 1.4% del PIB).

Las autoridades argumentan que el subsidio a los combustibles y al gas contribuyen al objetivo de la seguridad alimentaria, pues implica una congelación de precios contribuyendo a reducir el gasto de transporte de alimentos y el costo de preparación de alimentos. Según datos oficiales, únicamente el 24.5% de los hogares urbanos y el 12.9% de los rurales poseen al menos un vehículo propio. Ambos subsidios estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022, luego que la última prórroga al subsidio a los combustibles fuera aprobada por la Asamblea Legislativa en octubre de 2022.

Previo al choque inflacionario se aprobó un incremento al salario mínimo del 20%, y un subsidio por 12 meses para apoyar a las micro y pequeñas empresas.

El programa destinó US\$60.5 millones para apoyar a 14,700 micro y pequeñas empresas, pues en estos casos el subsidio absorbió el incremento del salario mínimo. Aunque esta medida no fue establecida para combatir la inflación, su permanencia favoreció a un segmento de la MYPE que pudo haber sido afectada por el alza de los precios.

GUATEMALA

Jordi Prat y Jorge Coj Sam



1. Panorama de la seguridad alimentaria

La alta inseguridad alimentaria de Guatemala ha tenido un fuerte impacto en indicadores sociales.

Para el caso de Guatemala el país tiene una de las más altas prevalencias en desnutrición crónica del mundo, donde el porcentaje de niños menores de 5 años con un crecimiento insuficiente para su edad alcanza el 46%, similar al de países como Burundi, Timor-Leste, Yemen y la República Democrática del Congo⁴⁴. Este indicador es mayor en los grupos indígenas (58%), en los niños con madres sin educación (67%) y en las familias en el menor quintil de riqueza (65%)⁴⁵. Sobresale la prevalencia de desnutrición crónica en los departamentos de Totonicapán (70%), Quiché (69%), Huehuetenango (68%) y Sololá

(66%). Sumado a esto, los períodos de hambre estacional ocasionan una mayor incidencia de la desnutrición aguda, la cual aumenta la probabilidad de mortalidad en la niñez⁴⁶. Si bien el país reportó una prevalencia de desnutrición aguda a nivel nacional del 0.8% en 2015, menor al estimado más reciente para la región de ALC de 1.3%⁴⁷, su prevalencia es mayor en los departamentos de Izabal (1.2%), Retalhuleu y Suchitepéquez (1.1%)⁴⁸. Los niveles de desnutrición crónica y aguda explican las elevadas tasas de mortalidad infantil (24 por 1.000 nacidos vivos) mayores al promedio de ALC (17)⁴⁹.

44 World Bank, "World Development Indicators | DataBank".

45 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto Nacional de Estadística, "VI Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2014-2015: Informe Final".

46 Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, "Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional".

47 FAO, "FAOSTAT".

48 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto Nacional de Estadística.

49 Banco Mundial.

La inseguridad alimentaria estacional en el país va de abril a septiembre, aunque la vulnerabilidad climática del país puede extenderla.

Durante este período los hogares vulnerables experimentan un deterioro predecible y recurrente de su situación alimentaria, causado por el período entre siembra y cosecha, la baja demanda de mano de obra y la recurrencia de fenómenos naturales. Sumado a esto el país ocupó el puesto 16 de 180 países como uno de los países más afectados por los efectos del cambio climático en el período 2000-19⁵⁰. El sector agrícola, a pesar de que representa el 9% del PIB emplea al 30% de la población ocupada, con gran parte de la producción a pequeña escala y de baja productividad. Esto lo convierte en un sector altamente sensible a los efectos del cambio climático y amenazando los medios de vida de las familias y, consecuentemente, un elemento clave para la evolución de la inseguridad alimentaria.⁵¹

Previo a la pandemia, los niveles de inseguridad alimentaria reflejaron una mejoría.

Esto es evidente en la evolución del Índice Global del Hambre entre el 2000 y 2019, al pasar de la categoría de hambre severa a moderada⁵². Sumado a esto, medido por la clasificación IPC, el país en 2019 registraba a un 18.4% de su población en riesgo de inseguridad alimentaria. Los mayores niveles de inseguridad alimentaria se concentraban en los departamentos de Chiquimula (49%), Alta Verapaz (38%), Quiché (30%), Jalapa (27%), Baja Verapaz (23%) y Santa Rosa (20%).

50 Eckstein, Künzel, y Schafer, "Global Climate Risk Index 2021".

51 Garrido y Ochoa, "Agricultura y seguridad alimentaria".

52 Global Hunger Index, "Global Hunger Index".

La pandemia ocasionó un aumento en el número de personas en riesgo de inseguridad alimentaria, con desigualdades territoriales.

Durante el período de agosto a octubre 2020, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) estimó 3.7 millones de personas (22% de la población) en riesgo de inseguridad, un aumento de 700 mil personas respecto 2019. Sumado a esto, 16 departamentos registraban tasas mayores al 20% de su población en riesgo de inseguridad alimentaria. No obstante, en el departamento de Guatemala, solo el 10% de los hogares se encontraba en la fase acentuada de inseguridad alimentaria. Dicho aumento fue ocasionado tanto por el incremento de dificultades para acceder a mercados, la pérdida de ingresos, así como un incremento en los precios de los alimentos por diversas razones, como las dificultades que sufrieron las cadenas productivas.

Sumado al impacto de la pandemia el país también se vio afectado por dos tormentas tropicales en 2020 que afectaron zonas con altos niveles de inseguridad alimentaria.

Las tormentas tropicales Eta e Iota afectaron principalmente a las regiones de Alta Verapaz, Quiché, Izabal y Huehuetenango⁵³. Estas dejaron más de 1.8 millones de personas damnificadas, 311 mil evacuados, 100 desaparecidos y 61 fallecidos⁵⁴. Al mismo tiempo, los daños se cuantificaron en US\$779 millones, de los cuales US\$157 millones correspondieron al sector agrícola. Como resultado, y a pesar del buen desempeño económico del país en 2021, la cantidad de personas en riesgo de inseguridad alimentaria prácticamente se mantuvo sin cambio, al pasar del 22% de población en 2020 a 20% en 2021, lo que refleja la vulnerabilidad climática en la seguridad alimentaria.

53 CEPAL, "Evaluación de los efectos e impactos de las depresiones tropicales Eta y Iota en Guatemala".

54 CONRED, "Respuesta ETA-IOTA".

El aumento de precios durante 2022 agudizó la situación de inseguridad alimentaria.

El conflicto Rusia-Ucrania ha tenido un efecto fuerte sobre el precio internacional de materias primas, incluyendo alimentos. A pesar de que el país mantiene una limitada relación comercial con los países en conflicto, el principal canal de transmisión lo constituyen el aumento en el precio internacional de los derivados del petróleo y de cereales, de los cuales el país es un importador neto. Sumado a esto, el país tiene uno de los mayores porcentajes de personas cuyo ingreso no cubre el costo de la canasta básica. Se estima que el 49% de los hogares no alcanza a cubrir el costo de la canasta básica alimentaria (46% en 2021). Los mayores costos de la canasta están asociados al consumo de cereales, especialmente los derivados de maíz y trigo, los cuales han registrado aumentos en su precio promedio de entre el 10% y 14%. De esta forma un porcentaje significativo de los hogares indica que el costo de vida se ha incrementado significativamente (72%) y por lo tanto un 39% de los hogares considera el no poder cubrir sus necesidades básicas como su principal reto en este momento⁵⁵. Como resultado la SESAN estima que 4.6 millones de personas (26% de la población) se encontrarían al final del periodo de hambre estacional en situación de crisis o emergencia de inseguridad alimentaria, un aumento del 40% respecto al nivel prepandemia.

2. Respuestas de política

Dado el contexto de desnutrición e inseguridad alimentaria del país, el gobierno lo consideró como una prioridad desde su inicio.

La misma presentó la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición desde la inauguración de su

⁵⁵ CID Gallup, “Estudio de Opinión Pública Guatemala #95”.

mandato. El plan se sustenta en cinco líneas de acción: Salud y Nutrición; Disponibilidad y acceso a una alimentación saludable; Protección social; Agua segura, saneamiento e higiene; y Comunicación para el cambio social y de comportamiento. Adicional a esto la SESAN cuenta con un Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional (POASAN) el cual establece diversas intervenciones en comunidades clasificadas de alta vulnerabilidad de inseguridad alimentaria y cuentan para 2022 de un presupuesto por US\$ 1,183 millones orientado a 110 actividades.

El gobierno elaboró su Programa Nacional de Emergencia en 2022 con acciones para garantizar la seguridad alimentaria y reducir el impacto de conflicto Rusia-Ucrania en el país.

El mismo consta de 30 acciones en temas de política fiscal, protección social, seguridad alimentaria, energía y combustibles, política monetaria y cooperación internacional. Los principales componentes incluyen: programa de subsidios a los combustibles⁵⁶ y gas propano⁵⁷, la ampliación de la tarifa social a la energía eléctrica⁵⁸. También se considera

⁵⁶ El programa fue creado mediante el decreto 15-2021 y ha sido extendido en tres ocasiones con los decretos 17-2022, 33-2022 y 45-2022, los cuales brindan subsidio equivale aproximadamente un 5% del valor del gas propano, beneficiando al 80% de los consumidores.

⁵⁷ Aprobado mediante el decreto 20-2022 y ha sido ampliado en dos ocasiones con los decretos 28-2022 y 42-2022, en cada ampliación el tipo de combustible y los montos de subsidio han cambiado. Al inició únicamente cubría los combustibles regular y diésel por un US\$ 0.64 centavos por galón, posteriormente se amplió la cobertura al combustible superior y también se aumentó el subsidio al combustible diésel a US\$ 0.91 centavos por galón, finalmente en la tercera extensión se redujo la cobertura únicamente al combustible diésel.

⁵⁸ Esta medida fue aprobada por el decreto 25-2022 y ampliada por el decreto 43-2022. En su primera aprobación amplía los beneficios de la tarifa social, reduciendo en un 4% el costo por kWh, a los usuarios con un consumo mensual de 89 kWh a 100 kWh. En la ampliación, se aumenta el número de beneficiarios para incluir en dicho programa a los hogares con consumo entre 101 a 125 kWh.

la ampliación de varios programas como: i) Transferencias monetarias, priorizando a las familias con niños con desnutrición aguda, se espera incorporar a 15 mil familias; ii) Ampliar el Programa de Dotaciones de Alimentos del Fondo de Desarrollo Social (FODES) para entregar 300 mil bolsas con alimentos para 15 días; iii) Extensión del programa de Alimento Complementario Fortificado “Nutriniños” para la compra de 3.9 millones de unidades de alimento fortificado; iv) Implementación de la Reserva Nacional de Granos Básicos para atender a 400 mil familias; v) Ampliación de la cobertura del programa de Asistencia Alimentaria; vi) Implementación del Programa de estipendios para el desarrollo agropecuario; vii) Autorización para la apertura de nuevos contingentes para la importación de maíz amarillo (100 mil TM), maíz Blanco (50 mil TM), arroz (65 mil TM) y frijol negro (5 mil TM).

Se asignó un 0.5% del PIB a la implementación del Programa Nacional de Emergencia 2022.

El 61% de estos recursos se destinó al programa de subsidio a los combustibles (US\$ 293 millones), un 6% a la ampliación de la tarifa social (US\$ 29 millones), un 9% en el subsidio al gas propano (US\$ 28 millones) y un 3% en el programa de estipendios para el desarrollo agropecuario (US\$ 12 millones). A julio, los programas han logrado, en promedio, una ejecución del 62%, con marcadas diferencias por el tipo de programa. Mientras que la ampliación de la tarifa social alcanza una ejecución del 100%, los subsidios al combustible y al gas propano tienen una ejecución del 97% y 98% respectivamente. El gobierno ha financiado este programa utilizando saldos de caja de 2021.

HAITÍ

Laura Giles Alvarez y Nerlyne Jeanbaptiste



1. Panorama de la seguridad alimentaria

Haití es uno de los países con las mayores tasas de inseguridad alimentaria del mundo.

Haití ocupa el puesto 109 de 116 países en el Índice Global del Hambre (2021), y está clasificado entre los diez países con menor seguridad alimentaria del mundo, según la edición de 2022 del informe *El Estado De La Seguridad Alimentaria y La Nutrición en el Mundo* (SOFI). En el segundo semestre de 2022, 15 de las 32 zonas del país estaban clasificadas por la Clasificación Integrada de la Fase de Seguridad Alimentaria (CPI, por sus siglas en inglés) como en emergencia y el resto fueron clasificadas en crisis⁵⁹.

El estado de inseguridad alimentaria en Haití ha ido empeorando en los últimos años como

consecuencia del deterioro de la seguridad y el difícil acceso a la gasolina y al acceso terrestre a la capital, los desastres relacionados con fenómenos naturales extremos y los efectos globales de la pandemia y la guerra en Ucrania. La proporción de personas que se enfrentan a inseguridad alimentaria aguda ha aumentado sustancialmente, de 1 de cada 3 personas en 2018 a casi 1 de cada 2 en 2022.

La disponibilidad de alimentos ha disminuido en los últimos años por varios factores a nivel nacional e internacional.

La dimensión de disponibilidad de alimentos evalúa el suministro de alimentos, ya sea a través de la producción nacional, las importaciones o la ayuda internacional:

La producción nacional: La agricultura es uno de los sectores económicos más importantes en Haití, ya que genera el 18% del PIB y en torno al 50% del empleo. Sin embargo, debido a varios factores, la productividad agrícola

⁵⁹ Las regiones en su mayoría se encuentran en el Noroeste, Noreste, Sureste, Sur, en Grande Anse y en los alrededores de la zona metropolitana. Más información en: <https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1155963/?iso3=HTI>

es baja en comparación con estándares internacionales.

En primer lugar, Haití muestra brechas en la disponibilidad de infraestructura de producción y distribución de alimentos, particularmente en carreteras, sistemas de riego y centros de producción. Por ejemplo, el 68.2% del país y el 42.1% de la población están afectados por brechas en el acceso a carreteras, y el 44.3% del país y el 21.1% de la población se ven afectados por deficiencias en el acceso a la infraestructura agrícola (incluidos a sistemas de riego e instalaciones de producción).

En segundo lugar, la productividad agrícola se ve limitada por insuficiente financiación pública, la pandemia y problemas de seguridad, ligados a la creciente violencia en el país y protestas recurrentes. A pesar de que la agricultura es uno de los principales sectores económicos del país, sólo el 2.5% del presupuesto estatal del año fiscal 2022 (0.2% del PIB) se asignó al sector, mucho menor que la financiación de donantes. La pandemia, las protestas sociales y el aumento de la inseguridad también han dificultado la producción nacional, con una reducción del acceso a insumos de producción y financiación por parte de agricultores, así como un acceso limitado a programas de asistencia técnica y a la distribución debido a las restricciones de desplazamiento y movilidad.

En tercer lugar, la escasa mecanización de las prácticas agrícolas y la falta de economías de escala limitan los rendimientos potenciales del sector. Por último, los desastres relacionados con fenómenos naturales extremos, que afectan recurrentemente al país - sequías, inundaciones, tormentas y terremotos - dificultan la capacidad de producción y el rendimiento de las cosechas (este punto se trata con más detalle en el apartado de “estabilidad alimentaria”).

La importación de alimentos: Haití depende en gran medida de productos alimentarios importados, que representaron una media del 19.6% de los bienes importados entre 2016 y

2020. Durante la pandemia, las interrupciones en las cadenas de suministros a nivel mundial provocaron tensiones sin precedentes en el suministro de alimentos y contribuyeron a la subida de sus precios. Las tensiones geopolíticas derivadas de la guerra en Ucrania han obstaculizado aún más el suministro mundial de alimentos, aumentando más los precios y reduciendo la oferta, lo que está teniendo efectos devastadores en países importadores de alimentos como Haití.

La ayuda al desarrollo: Haití depende en gran medida de fondos de la cooperación internacional, que alcanzaron un estimado del 2.7% del PIB en el año fiscal 2022, casi la mitad de la recaudación de ingresos del estado para ese año. Sin embargo, este tipo de financiación ha ido disminuyendo desde el terremoto de 2010, pasando de 5.7% del PIB de media en los años fiscales 2011 y 2012 al 1.8% del PIB de media en los años fiscales 2021 y 2022. El gasto de donantes en el sector agrícola supuso una media del 9.4% de la ayuda internacional (0.5% del PIB), entre 2010 y 2020. Esto es más del doble de la cantidad estipulada en los presupuestos del estado en el año fiscal 2022 para el sector.

El acceso a alimentos se ve obstaculizado por los altos niveles de pobreza y el aumento de los precios, así como por la reducción de la movilidad.

El acceso depende de la capacidad de los hogares para obtener y comprar alimentos. El aislamiento geográfico, las deficientes infraestructuras de transporte, la inseguridad y la vulnerabilidad a los desastres relacionados con fenómenos naturales extremos (que se analizan con más detalle en otras secciones), dificultan la capacidad de acceso de las personas. Por ejemplo, el 14.9% de la población se ve afectada por el escaso acceso a mercados en zonas con inseguridad alimentaria.

El empeoramiento de la seguridad también dificulta el acceso a productos alimenticios,

tanto de producción nacional como importados. A nivel nacional, el 33% y el 66% de la población identificaron la violencia armada y los secuestros como las principales razones, respectivamente, que impedían el acceso a los mercados en 2019. Desde entonces, la seguridad se ha deteriorado aún más. Los precios internacionales de alimentos también han aumentado drásticamente como resultado de las interrupciones en las cadenas de suministro durante la pandemia y los efectos de la guerra en Ucrania.

Esto ha venido de la mano de una depreciación de la moneda nacional. La tasa de inflación anual de los productos importados alcanzó el 41.7% en junio de 2022, frente al 14.2% en junio de 2021, y la tasa de inflación anual de los productos alimentarios fue del 30.7% en junio de 2022, frente al 15% en junio de 2021. Los altos niveles de pobreza, la subida de los precios y la insuficiencia de fuentes estables de ingresos han reducido el poder adquisitivo de los hogares en Haití. La tasa de pobreza supera el 58% y el poder adquisitivo de los hogares se ha visto mermado en los últimos años por la elevada inflación, que se ha mantenido en dos dígitos desde 2015.

La utilización de alimentos se ve afectada por limitado acceso a infraestructura de agua y saneamiento y por una falta de diversidad dietética.

Haití tiene brechas en el acceso a instalaciones adecuadas de agua y saneamiento, especialmente en las zonas rurales. Estimaciones recientes sugieren que el 12.3% de la población está afectada por brechas en el acceso al agua potable. Además, el 20.2% de la población carece de acceso a instalaciones de saneamiento⁶⁰. Haití también registra altos niveles de retraso en el crecimiento y problemas de salud ligados a una alimentación sin suficiente diversidad dietética. Según la

60 Las estimaciones de pueden encontrar en: <https://publications.iadb.org/en/maps-gaps-geospatial-approach-estimating-development-gaps-haiti>

encuesta demográfica y de salud de 2016/17, el 21.9% de los niños menores de 5 años tienen retraso en el crecimiento, el 49% de los niños menores de 5 años y el 66.3% de las mujeres de 15 a 49 años son anémicos y solo el 25.4% de los niños de 6 a 23 meses recibieron una dieta mínimamente diversificada⁶¹.

La estabilidad alimentaria se ve comprometida por interrupciones en la cadena de suministros, la reducida movilidad por la inseguridad y los desastres naturales.

La estabilidad alimentaria se refiere a la capacidad de mantener un suministro adecuado de alimentos frente a choques inesperados. Además de las interrupciones de la cadena de suministro a nivel internacional en los últimos años, la violencia doméstica y los bloqueos de carreteras siguen obstaculizando las cadenas de suministro nacionales y también han dificultado el suministro de importaciones y la ayuda humanitaria. Este último punto se puso de manifiesto durante la respuesta al terremoto de 2021, cuando la distribución de la ayuda humanitaria se vio obstaculizada por los bloqueos de carreteras establecidos por bandas armadas en los barrios periféricos de Puerto Príncipe, que impidieron la distribución de la ayuda hacia el sur durante varias semanas.

Los desastres relacionados con fenómenos naturales también contribuyen en gran medida a la inseguridad alimentaria, ya que interrumpen tanto la disponibilidad como la estabilidad de los alimentos. Según el Índice de Riesgo Climático Global 2021, Haití estuvo entre los tres países más afectados por los impactos de los

61 Niños alimentados con alimentos de al menos cuatro grupos que contengan: a. fórmulas comerciales para bebés, leche distinta de la materna, queso, yogur u otros productos lácteos; b. fórmulas a base de cereales, raíces o tubérculos y fórmulas fortificadas a base de cereales para bebés; c. frutas y verduras ricas en vitamina A; d. otras frutas y verduras; e. huevos; f. carne, aves, pescado y mariscos (y despojos); g. legumbres y frutos secos, pescado y marisco; g. legumbres y frutos secos. <https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/FR326/FR326.pdf>

fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo entre 2000 y 2019. Durante ese tiempo, Haití sufrió un impacto negativo del 0.8% del PIB al año. Las inundaciones, las tormentas, las sequías y los terremotos son recurrentes en Haití, y todos ellos afectan negativamente a la producción de cultivos y a la distribución de alimentos. Por ejemplo, el sector agrícola perdió hasta el 70% de la producción en ciertas regiones del país durante la sequía de 2015-2016⁶².

2. Respuestas de política

El gobierno ha implementado medidas recientes para combatir la inseguridad alimentaria y la inflación, además de los programas ya existentes.

Antes de los desafíos mundiales de suministros de alimentos que se han venido registrando en los últimos meses, Haití ya tenía un problema grave de inseguridad alimentaria. El país por tanto contaba con varios programas de seguridad alimentaria, financiados tanto por el estado como por donantes. Como respuesta a la creciente inflación y a los efectos de las tensiones geopolíticas de la guerra de Ucrania, el gobierno anunció unas series de medidas adicionales que se detallan en los siguientes párrafos.

El BID y el Banco Mundial también han apoyado estas medidas con varios proyectos, tanto desde el sector agrícola como el sector social y de educación para mejorar el panorama de seguridad alimentaria en el país. El costo fiscal estimado a mediados de septiembre 2022 es de US\$170 millones (0.8% del PIB)⁶³. Desde

2022 varios donantes también han aprobado proyectos adicionales de seguridad alimentaria. Por ejemplo, la Unión Europea y Canadá aprobaron EUR 70 millones (aproximadamente 0.3% del PIB) y US\$ 160 millones (0.8% del PIB) respectivamente para la seguridad alimentaria en enero 2022⁶⁴.

I. Medidas fiscales: Se aumentaron los programas de transferencias en efectivo para las personas pobres y vulnerables combatir la inflación y la inseguridad alimentaria (en torno a US\$ 28 millones o 0.1% del PIB presupuestados para el año fiscal 2022). En el presupuesto del año fiscal 2023 el gobierno también propone un programa de reducción de gastos no esenciales para abrir espacio fiscal para gasto social. Asimismo, el gobierno firmó un nuevo programa de protección social con el BID, que destinará en torno a US\$ 40 millones (0.2% del PIB) a programas de transferencias, con el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria.

II. Medidas salariales: El gobierno aumentó el salario mínimo en febrero 2022, de US\$2.40-US\$5.29 la hora, a US\$3.37-US\$7.40 la hora, según el sector. Esto supuso un aumento de entre 37% y 40%, según el sector.

III. Medidas sector agrícola: Financiamiento para campañas agrícolas (como parte del paquete de US\$ 28 millones en el presupuesto del año fiscal 2022), el Banco Mundial también aprobó un programa por US\$ 102 millones en marzo (0.5% del PIB) para apoyar al sector agrícola⁶⁵.

62 <https://reliefweb.int/report/haiti/haiti-agriculture-country-hit-worst-drought-35-years>

63 Estas estimaciones incluyen el costo de los programas resaltados en el presupuesto del estado FY22 (presupuestados para el periodo mayo-septiembre 2022) y los programas aprobados del BID y el Banco Mundial a día 16 de septiembre 2022. No incluyen el costo de los programas resaltados en el presupuesto del estado FY23 ni el costo de programas de otros donantes ni del aumento del salario mínimo.

64 Estos son algunos ejemplos de las principales donaciones registradas en la primera mitad de 2022.

65 Estas medidas incluyen sólo los programas aprobados a partir del aumento global de precios en 2022.

HONDURAS

Jordi Prat, Ana Andino y Eduardo Camilo Pacheco



1. Panorama de la seguridad alimentaria

La inseguridad alimentaria en Honduras afecta a un alto porcentaje de la población.

Esto es un reflejo de los altos niveles de pobreza, ya que a pesar de las acciones implementadas entre 2014 y 2019, al menos el 40% de la población hondureña vivía en situación de pobreza previo a la pandemia.⁶⁶ También, se asocia a la alta vulnerabilidad del país a fenómenos climáticos extremos, pues Honduras fue afectado, entre 1998 y 2019, por al menos 65 eventos climáticos de impacto moderado y extremo, incluyendo varias sequías entre 2014-2019.

66 Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), utilizando la anterior metodología, la pobreza general bajó en 3,6 p.p al pasar de 43.7% en 2014 a 40.1% en 2019, y la pobreza extrema disminuyó en 1.1 p.p al pasar de 20.6% a 19.5% en el mismo lapso.

Previo a la pandemia del COVID-19 cerca de 962 mil personas de 13 departamentos se encontraban en situación de inseguridad alimentaria crítica o emergencia en Honduras.

Según el análisis CIF (IPC, por sus siglas en inglés)⁶⁷ de inseguridad alimentaria aguda publicado por la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN) (2019)⁶⁸, el 18% de la población de 13 departamentos (de 18) del país estaba en situación de inseguridad alimentaria severa. Los departamentos clasificados en fase 3 o peor⁶⁹ a febrero 2020 eran El Paraíso, Francisco Morazán (con excepción de Distrito Central), Intibucá, La Paz, Copán, Choluteca y Valle. La población

67 Clasificación Integrada de la seguridad alimentaria en Fases (CIF).

68 UTSAN (2019): https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Honduras_AcuteFoodSec_2019Nov2020June_Spanish.pdf

69 Personas en crisis (fase 3) y personas en emergencia (fase 4).

en peor condición previo a la pandemia eran agricultores de subsistencia que tuvieron pérdidas productivas en granos básicos de más del 50% de la cosecha planificada para el segundo semestre de 2019.

Las causas de la inseguridad alimentaria previo a la pandemia se asociaban principalmente con actividades agrícolas.

Los factores causales de la inseguridad alimentaria en 2019 eran: i) una sequía prolongada en este año, que provocó pérdidas en las cosechas de frijol y maíz y redujo la disponibilidad de alimentos en los hogares; ii) la reducción en los precios internacionales del café, que afectó el ingreso de los productores de café y las personas que trabajan en este rubro; y iii) el alza en los precios de los granos básicos, que afectó la capacidad de compra de los hogares.

La pandemia del COVID-19 exacerbó la inseguridad alimentaria.

Las medidas para mitigar la emergencia sanitaria, como la restricción en la movilización de personas y mercancías limitaron el acceso a sitios de trabajo, los mercados y al comercio transfronterizo. Esto generó una caída de ingresos y pérdida de empleo en los hogares. Además, los precios de los alimentos incrementaron por el aumento en los costos de las cadenas de suministro a nivel internacional, afectando el poder adquisitivo de los hogares hondureños.

Los huracanes Eta e Iota afectaron los medios de vida de la población rural, lo que agudizó la inseguridad alimentaria durante la pandemia.

En noviembre 2020, el atlántico norte del país se vio afectado por los huracanes Eta e Iota, que ocasionaron pérdidas en agricultura y ganadería, así como en infraestructura productiva. Lo anterior ocasionó un incremento

en los precios de los alimentos. Las tormentas generaron daños equivalentes al 8% del PIB⁷⁰ (CEPAL, 2021⁷¹) y la pobreza a nivel de hogares aumentó 14 puntos porcentuales entre 2019 y 2020.⁷²

La inseguridad alimentaria se ha incrementado durante la pandemia.

La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN) (2022)⁷³ estima que, entre junio y agosto 2022, 3.7 millones de personas se encontraban en situación de inseguridad alimentaria acentuada y 2.6 millones de personas se encontraban en situación de inseguridad alimentaria en condiciones de crisis o emergencia en Honduras. La inseguridad alimentaria severa está afectando al 28% de la población total (2.6 millones) y continuando en aumento con relación a la estimación para el periodo entre diciembre 2021 y febrero 2022 (2.2 millones de personas afectadas). De acuerdo con el análisis CIF, los departamentos más afectados son Gracias a Dios (43%), Lempira (32%) y La Paz (30%), que son zonas donde se producen granos básicos de subsistencia y café.

El incremento en la inseguridad alimentaria en el país se debe a múltiples factores.

En primera instancia, la economía todavía no se recupera totalmente por efecto de la pandemia y los huracanes Eta e Iota. En

70 La metodología DALA por la CEPAL cuantifica los daños, las pérdidas y los costos adicionales ocasionados por las tormentas Eta e Iota, las cuales totalizaron aproximadamente US\$1,800 millones.

71 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2021). Evaluación de los efectos e impactos de la tormenta tropical Eta y el huracán Iota en Honduras. Nota Técnica No. IDB-TN-2168. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46853/S2100044_es.pdf?sequence=3&isAllowed=y

72 Instituto Nacional de Estadística (INE).

73 UTSAN (2022): https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Honduras_Acute_Food_Insec_2021Dec2022Aug_Report_Spanish.pdf

segundo, las pérdidas en la producción de granos básicos (principalmente frijol y maíz) han alcanzado hasta un 50% de la producción total. Finalmente, el alza en los precios de los alimentos, debido a las pérdidas productivas, agotamiento de reservas en el mercado, incremento en los costos de producción (alza en el precio de los fertilizantes) y la crisis en las cadenas de suministro a nivel internacional, limitan la capacidad de compra de los hogares.

El alza en los precios de los alimentos e insumos a nivel internacional afecta a los productos que el país importa, como granos básicos y fertilizantes, impactando en la disponibilidad alimentaria.

Las importaciones de maíz y trigo representan el 16% del total de importaciones de alimentos, según datos de la SIECA. El consumo de fertilizantes en 2018 es de 184,2 kilogramos por hectáreas de tierras cultivables (ALC: 171,2 kg), según datos del Banco Mundial.⁷⁴ El grado de dependencia de las importaciones de granos básicos con relación a su consumo en los últimos tres años es de 80% para el caso del arroz y maíz y 100% para el trigo, según datos de CEPAL.⁷⁵

Los factores antes mencionados han presionado al alza la inflación alimentaria desde mediados de 2021.

La inflación (interanual) de alimentos ha crecido sostenidamente desde agosto 2021 (0.5%), hasta ubicarse en 17.2% en septiembre 2022⁷⁶. La inflación alimentaria es 7,2 puntos porcentuales más alta que la inflación general.

74 Datos del Banco Mundial: <https://datos.bancomundial.org/indicador/AG.CON.FERT.ZS>

75 CEPALSTAT: <https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/index.html>

76 Banco Central de Honduras: <https://www.bch.hn/estadisticas-y-publicaciones-economicas/publicaciones-de-precios/indice-de-precios-al-consumidor>

El acceso a alimentos se ha dificultado desde inicios de 2020.

Las personas de menores ingresos destinan mayor porcentaje de su gasto en la compra de alimentos. En un contexto de alta incidencia de la pobreza, con un deterioro durante la pandemia, como es el caso de Honduras, el aumento en los precios de los alimentos incide en la dificultad para adquirirlos. Datos de CID Gallup (2022)⁷⁷ reflejan que ha aumentado el porcentaje de la población que opina que el costo de la vida ha subido mucho, al pasar del 52% en septiembre 2021 a 58% en septiembre 2022.

De hecho, según CID Gallup, en septiembre 2022 la segunda preocupación en los hogares de los hondureños es el costo de cubrir las necesidades básicas (20%). El costo de la vida afecta la seguridad alimentaria en las familias, ya que para el 64% de los hondureños ha habido alguna ocasión durante el último año donde no tuvo dinero para comprar comida.

La inseguridad alimentaria se ve reflejada en los datos de desnutrición.

Según datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud/Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (ENDESA/MICS)⁷⁸, la desnutrición crónica en 2019 afectaba al 19% de niños menores de cinco años, siendo esta situación más crítica en el corredor seco. De esta proporción, el 4% exhibía desnutrición crónica severa.

2. Respuestas de política

El gobierno de Honduras declaró Estado de Emergencia Alimentaria en mayo 2022.

77 CID Gallup (2022). Estudio de Opinión Pública Honduras #113. Septiembre 2022.

78 ENDESA / MICS 2019: <https://www.ine.gob.hn/V3/imag-doc/2021/10/Informe-ENDESA-MICS-2019.pdf>

El estado de emergencia se declaró para todo el territorio nacional y cubriría el resto de 2022. El Decreto Ejecutivo PCM-10-2022 ordena la reactivación económica y financiera del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), entidad encargada de atender la emergencia, y le permite contratar de forma urgente agrónomos, personal administrativo y financiero para responder a la crisis de manera oportuna y en las mejores condiciones de costo.

Se anunció un paquete de medidas en torno a combatir la inseguridad alimentaria cuyo impacto fiscal se estima en aproximadamente 1.1% del PIB.

La Secretaría de Desarrollo e Inclusión (SEDESOL) estaría destinando a través de la red solidaria y de otras entidades de gobierno, una cartera de programas de aproximadamente L 8,000 millones (US\$326.5 millones), los cuales se desglosan entre: i) Meriendas escolares (US\$53 millones), ii) ejecución de varias estrategias como cajas rurales y emprendimientos en zonas de extrema pobreza (US\$200 millones), iii) Otros programas de apoyo a los hogares que viven en extrema pobreza por factores como cambio climático, desempleo y disminución de poder adquisitivo debido a la inflación (US\$16.3 millones); iv) Bono Tecnológico Productivo (BTP)⁷⁹ ya que el acceso a financiamiento agrícola es limitado (US\$28.6 millones), y v) para subsidiar el costo de los combustibles a BANADESA y así reducir costos de producción (US\$40.8 millones).

BANADESA anunció una nueva línea de crédito para el sector ganadero.

BANADESA anunció créditos de hasta US\$ 81,600 con una tasa de interés de 7% para el sector ganadero, quienes se dedican a la crianza

de cerdos, bovinos y ovejas. Al momento, BANADESA ha colocado aproximadamente US\$ 13 millones en créditos.

El gobierno también ha tomado otras medidas anti-inflacionarias aparte del paquete de programas en torno a combatir la inseguridad alimentaria por 0.73% del PIB.

Entre las más destacadas: i) la extensión del subsidio a los fletes marítimos durante los primeros 6 meses del 2022 para contener los altos costos (costo de 0.07% del PIB); ii) reducción del impuesto a los combustibles (0.38% del PIB); iii) subsidio del 50% al incremento del diésel⁸⁰; iv) subsidio al aumento de 11% de la tarifa eléctrica para el tercer trimestre del año (0.26% del PIB); v) congelamiento del precio actual de la gasolina durante junio y julio (0.02% del PIB); y vi) fijación del precio de ciertos alimentos como el de maíz blanco, frijol y la leche procesada y actualmente se está considerando la fijación de precios de otros alimentos de la canasta básica.

⁷⁹ Los paquetes contienen semilla mejorada, fertilizantes e insumos para combatir plagas y enfermedades de la primera cosecha, para atender principalmente la producción de granos básicos (maíz, frijoles y arroz) y tiene programado apoyar a 120 mil pequeños productores en la primera etapa de entrega.

⁸⁰ El subsidio tomó vigencia en marzo y estaría vigente hasta que la tendencia alcista mundial cese razonablemente. A junio del 2022, el gobierno ya había subsidiado US\$18.2 millones (0.06% PIB).

MÉXICO

Agustín Filippo y Miguel Ángel Jiménez



1. Panorama de la seguridad alimentaria

México ha venido recuperándose gradualmente del choque de la pandemia, pero ha expuesto a los hogares a inseguridad alimentaria.

El PIB registró un crecimiento de 4.8% en 2021, tras la caída de 8.1% en 2020. No obstante, la economía todavía no se ha recuperado plenamente (tiene un nivel similar al que prevalecía en 2017) y permanecen importantes retos en distintas áreas. Entre ellos, se encuentra el hecho de que la población en pobreza laboral (aquella cuyos ingresos laborales son insuficientes para adquirir la canasta básica alimentaria) aumentó de manera considerable a raíz del choque pandémico lo que, junto a los elevados niveles de inflación actuales, la permanencia de interrupciones en la oferta, y las presiones en el mercado energético, ha expuesto a más hogares a enfrentar algún grado de inseguridad alimentaria.

Previo a la pandemia, México había logrado avances en materia de reducción de la pobreza laboral.

Del último trimestre de 2014 al primer trimestre de 2020, el país registró una reducción de 19.5% en el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria al pasar de 45.5% hasta 36.6% de la población. Sin embargo, la pandemia frenó estos avances y, tras lo más grave de la crisis, el porcentaje de la población en pobreza laboral se incrementó de manera significativa hasta alcanzar 46% (tercer trimestre de 2020). Si bien la recuperación de la actividad económica y del mercado laboral post-pandemia han contribuido a que más personas se encuentren recibiendo un ingreso, el porcentaje de la población en situación de pobreza laboral se encuentra todavía arriba de sus niveles precrisis (se ubicó en 38.3% en el segundo trimestre de 2022), ubicando a un mayor número de

personas en una situación de vulnerabilidad ante las presiones en los precios.

La inflación en México ha alcanzado niveles no vistos desde el año 2000, con presiones importantes en los precios de los alimentos.

La inflación en México se ubicó en 8.70% en septiembre 2022, su nivel más alto desde diciembre del 2000 cuando se ubicó en 8.96%, acumulando 19 meses fuera del rango objetivo del Banco de México (3% +/- un punto porcentual). Las presiones inflacionarias han sido particularmente importantes sobre los productos alimenticios y, en agosto, estos fueron los que registraron las mayores alzas, al observarse un incremento de 13.38% en alimentos, bebidas y tabaco, 14.18% en frutas y verduras, y 15.79% en productos pecuarios.

México ha visto un ligero retroceso en gran parte de sus indicadores de nutrición y seguridad alimentaria.

De acuerdo con la FAO (2022), la prevalencia de inseguridad alimentaria (moderada o severa) en México aumentó de 25.6% entre 2014-2016 a 26.1% entre 2019-2021. Mientras que, la prevalencia de inseguridad alimentaria severa pasó de 3.6 a 3.7% durante el mismo periodo. Por otro lado, la última medición de la pobreza del CONEVAL (2020) arrojó resultados similares al registrar un ligero aumento en el porcentaje de la población con carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, el cual pasó de 22.2% en 2018 a 22.5% en 2020 (en 2016 la cifra fue 21.9%). Al mismo tiempo, según los datos de la FAO, otros indicadores como la desnutrición y la obesidad también registraron retrocesos al pasar de 4.4 a 6.1% (de 2004-2006 a 2019-2021) y de 26.8 a 28.9% (de 2012 a 2016), respectivamente. La obesidad y el sobrepeso son uno de los principales retos en materia de salud pública y, de acuerdo con datos de la OCDE (2022), en México 75.2% de la población presenta algún tipo de sobrepeso (incluyendo

obesidad). Si bien el retroceso en la mayoría de los indicadores es menor al observado en otros países de la región, reflejan un importante deterioro en los avances logrados en materia de seguridad alimentaria en el país. Como ilustración, el porcentaje de la población incapaz de permitirse una dieta saludable había venido marcando una tendencia a la baja, al pasar de 26.1% en 2017 a 24.9% en 2018, para llegar a 23.7% en 2019. Sin embargo, derivado de la crisis, este indicador retrocedió hasta ubicarse en 26.3% en 2020 (arriba de su nivel de 2017).

El retroceso en seguridad alimentaria ha sido resultado principalmente de un aumento en la pobreza laboral junto a los elevados niveles de inflación.

El sector primario en México mostró particular resiliencia ante el choque de la pandemia, siendo el único cuyo PIB únicamente estuvo por debajo de su nivel precrisis durante un trimestre. De igual manera, la producción agrícola en el país fue poco afectada por la pandemia y, al cierre de 2021, se logró una producción de 268.4 millones de toneladas de alimentos del campo (cifra 1.3% superior a la de 2020). Esto se ve también reflejado en los indicadores de disponibilidad y variabilidad de la oferta alimentaria per cápita de la FAO, según los cuales la disponibilidad de alimentos se mantuvo sin cambios ante la pandemia. Si bien la balanza comercial de productos agropecuarios y agroindustriales ha mantenido saldos positivos, indicando en apariencia poca dependencia de las importaciones de este tipo, los datos agregados no reflejan que existe una alta dependencia de productos como granos y cereales. En el caso de México, el retroceso en seguridad alimentaria se ha debido principalmente a los impactos de la coyuntura global de altos niveles de inflación, presiones en los precios de los energéticos y disrupciones en la oferta a nivel global.

2.Respuestas de política

El Gobierno mexicano lanzó una serie de medidas enfocadas a contener la inflación, y con impactos directos e indirectos sobre la seguridad alimentaria.

En mayo se anunció el lanzamiento del Paquete contra la inflación y la carestía (PACIC). El paquete responde a los esfuerzos del gobierno por controlar los elevados niveles de inflación en el país. Dentro del paquete destaca el subsidio a las gasolinas (que impacta de manera indirecta los precios de los alimentos), la eliminación de aranceles a la importación de 21 productos de la canasta básica y de 5 insumos estratégicos (la medida es temporal por seis meses), y la eliminación de la cuota compensatoria a las importaciones de sulfato de amonio. En el paquete también se incluye el apoyo de los programas “Sembrando Vida” y “Producción para el Bienestar”, así como la entrega de fertilizantes (aunque cabe notar que estos programas formaban parte de las acciones del gobierno desde antes de la crisis). De igual manera, como parte del PACIC, también se constituyó una reserva estratégica de maíz y se dirigieron esfuerzos para hacer más eficiente la logística y así abaratar costos.

En octubre 2022, el Gobierno anunció medidas complementarias para fortalecer el PACIC. Entre las nuevas medidas destacan: la cancelación temporal de la exportación de maíz blanco, frijol, sardina, y chatarra de aluminio y acero utilizado en los envases de alimentos; el otorgamiento de una Licencia Única Universal a las empresas que se suscriban al acuerdo, la cual las eximirá de cualquier trámite o permiso para la importación y distribución de alimentos e insumos; y el congelamiento del precio del maíz y de las tarifas de las autopistas.

Se estima que el costo del paquete PACIC sea de cerca de 2% del PIB.

Esto de acuerdo con información dada a conocer por la Secretaría de Hacienda en agosto. El costo fiscal para contener la inflación será de 574.6 mil millones de pesos (US\$ 28 mil millones) en 2022, derivado, principalmente, de los subsidios a las gasolinas y electricidad, así como de otras medidas del paquete contra la inflación (PACIC). El mayor costo provendrá del subsidio a las gasolinas al representar cerca del 75% del total, seguido por los subsidios a la electricidad (13%) y por otras medidas para contener aumentos en los precios de los alimentos (12%). Hasta la fecha, se descarta que la mayor parte de las medidas del PACIC haya logrado bajar los precios de los alimentos. Sin embargo, los subsidios a las gasolinas han logrado contener los precios de los combustibles y evitar una espiral inflacionaria mayor.

NICARAGUA

Julia Escobar y Gabriela Orozco



1. Panorama de la seguridad alimentaria

La estructura económica de Nicaragua depende de la actividad agropecuaria representando casi el 15% del Producto Interno Bruto real.

Alrededor de 80% de las unidades productivas están compuestas por pequeños y medianos productores enfocados en el abastecimiento de los mercados locales o el autoconsumo siendo clave para la seguridad alimentaria del país, particularmente para las zonas rurales. Por otro lado, el remanente se encarga de los agronegocios controlando el 75% de las tierras agrícolas (CENAGRO, 2011).

El cambio climático y los desastres naturales afectan los niveles de seguridad alimentaria.

Según el Índice de Riesgo Climático a largo plazo, Nicaragua ocupa el lugar 35 de 177 entre los países afectados por el cambio climático en el periodo 2000 - 2019 (Germanwatch,

2021). Agudas sequías en el Corredor Seco Centroamericano entre 2018 y 2019 perjudicaron los medios de sustento de la población que apenas lograba recuperarse de las sequías del 2014 y 2015, desencadenando una inseguridad alimentaria moderada o severa para más de 70% de los agricultores de subsistencia en el país en 2019.

El hambre se acentúa en el corredor seco, especialmente donde habitan tres pueblos indígenas.

Según datos del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de 2018, se habían identificado 22 municipios del Corredor Seco con 85.000 niños en edades de preescolar y primaria en riesgo de inseguridad alimentaria, muchos de los cuales pertenecen a poblaciones indígenas Chorotega, Xiu y Nahoá.

Se han realizado esfuerzos de política para subsanar la problemática, la cual incide particularmente en poblaciones alejadas.

El Ministerio de Salud (MINSa) ha desarrollado varias actividades⁸¹ con el objetivo de mejorar los niveles de nutrición en particular para menores de 6 años, grupo en el que se han encontrado que la desnutrición crónica y la desnutrición aguda para 2021 han reducido en 32% y en 25% respectivamente en comparación con el 2016⁸². Pero siguen persistiendo retos de accesibilidad (zonas rurales, Corredor Seco y el Caribe) que impide mejorar las condiciones de pobreza y desnutrición de 35% de niños (FIDEG, 2020).

A los retos preexistentes se sumó la pandemia del COVID-19 y los huracanes Eta e Iota en 2020 que exacerbó la situación de inseguridad alimentaria.

La pandemia del COVID-19 generó una pérdida significativa de ingresos por las medidas de confinamiento que afectó a muchos países y al comercio mundial. Esto desencadenó el aumento de los niveles de hambre e inseguridad alimentaria en el mundo. En 2020, la prevalencia del hambre en ALC fue de 9.1% (cifra más alta de los últimos quince años) y para el caso de Nicaragua esta fue de 19.3% (1.3 millones de nicaragüenses) siendo uno de los países con mayor prevalencia de subalimentación. Por su parte, los huracanes Eta e Iota se sumaron a los efectos de la pandemia. El impacto de estos generó una pérdida de cosechas, muchas de ellas de autoconsumo (frijol, maíz, arroz), que agravó la inseguridad alimentaria en las zonas Centro y Costa Caribe.

81 Como parte de las políticas del MINSa Se han desarrollado actividades para mejorar los niveles de nutrición donde destacan i) entrega de micronutrientes en polvo, ii) entrega de tabletas de Zinc para niños o niñas con periodos diarreicos, y iii) continuidad de programas como "Programa Amor para los más chiquitos."

82 MINSa 11 de febrero 2022

Como resultado de las disrupciones en las cadenas globales de suministro y la guerra en Ucrania en 2022, los niveles de precios han alcanzado cifras históricas con afectación directa a los hogares.

En 2021 la inflación en Nicaragua cerró en 7.2%, la más alta de los últimos 10 años, como resultado de la recuperación de la actividad económica a nivel mundial y los problemas de la cadena de suministro que se agudizaron para el segundo semestre de ese año. Para 2022, diversos factores exógenos como la Guerra Rusia-Ucrania, han generado presiones adicionales que provocó que la inflación en julio 2022 alcanzara una cifra de 11.5%, la segunda más alta para Centroamérica. El sector que mostró mayor crecimiento en sus precios fue alimentos y bebidas no alcohólicas (17%), que representan cerca del 70% del costo total de la canasta básica, lo que ha provocado que la canasta básica aumente 16.9% entre julio 2021 y 2022. Generando un aumento significativo de los gastos para consumo básico de los hogares.

El poder adquisitivo de los hogares ha disminuido, limitando su acceso a alimentos.

El salario real del empleo formal en junio 2022 ha disminuido 8.3% en comparación a junio 2021. A pesar del aumento de la actividad económica desde 2021, el salario aún no ha alcanzado niveles previos a 2018 teniendo una reducción de 18.3% entre enero 2018 y junio de este año. En tal sentido, el PIB per cápita en 2021 fue de US\$2,102.8 luego de tres años de reducción consecutivos, y aún no ha llegado a los niveles de 2017 (US\$ 2,156.1).

Otros factores podrían agravar la inseguridad alimentaria a futuro.

Además del efecto directo provocado por el costo de la canasta de alimentos, se suma el efecto indirecto de la disminución de ingresos por dificultades de producción del sector

agrícola y de alimentos de autoconsumo. A junio 2022, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) creció 4.0%; donde el sector agrícola y el sector pecuario tuvieron crecimientos interanuales de 2.2% y 0.2% respectivamente. Según el Plan Nacional de Consumo 2022/23 se espera que la producción crezca con respecto al ciclo 2021/22, en particular la carne de cerdo (6%), carne bovina (5%) y acopio de leche (4%); cabe destacar que los granos básicos están proyectados a crecer en 3.2% este ciclo. Pero los altos costos en los insumos agrícolas, principalmente los fertilizantes, más afectaciones climáticas podrían afectar el rendimiento del sector en 2023 y agravar la situación alimentaria nacional.

2. Respuestas de política

Como medida de apoyo para reducir el impacto de los precios del petróleo, el Gobierno de Nicaragua ha congelado los precios de los combustibles durante 24 semanas.

La medida busca reducir el impacto del incremento en los precios del petróleo y sus derivados sobre la economía nicaragüense, fue anunciada desde el 03 de abril de 2022, y aplicada sobre los precios de la gasolina Súper y regular, y diésel. Según declaraciones del Gobierno⁸³ el costo de la medida es de aproximadamente de US\$4 millones por semana, totalizando a la fecha alrededor de US\$96 millones (0.6% del PIB)⁸⁴. Adicionalmente, el Gobierno ha optado por congelar los precios del gas licuado de petróleo; sin embargo, se desconoce el impacto fiscal de esta medida.

83 El presidente Ortega ha mencionado que pueden necesitarse entre US\$4 - US\$6 millones de dólares para mantener los precios por semana.

84 A septiembre 25, 2022 (INE, 2022).

Para financiar la medida se ha suscrito un préstamo del BCIE por US\$200 millones.

El Parlamento nicaragüense aprobó el 12 de julio de 2022 el contrato de préstamo por US\$200 millones suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar la implementación del “Programa Temporal de Apoyo ante la Crisis de los Combustibles en Nicaragua”⁸⁵.

85 Asamblea Nacional ratifica préstamo con el BCIE dirigido a reducir el impacto de los precios del petróleo. Para el préstamo se establecieron las siguientes condiciones: “a cinco (5) años para cada desembolso contado a partir de la fecha de cada desembolso del préstamo; Tasa de Interés LIBOR a seis (6) meses revisable y ajustable semestralmente, más un margen establecido por el BCIE que inicialmente será de ciento sesenta y cinco (165) puntos básicos, revisable y ajustable trimestralmente, durante la vigencia del préstamo.” Decreto A.N. No 8813

PANAMÁ

Carlos Garcimartín y Rubilú Rodríguez



1. Panorama de la seguridad alimentaria

La situación de subalimentación y desnutrición de la población mejoró antes y después de la pandemia.

Según datos de la FAO, la prevalencia de subalimentación en Panamá disminuyó significativamente desde el periodo 2000-2002 hasta 2017-2019, pasando de 24.5% de la población a 7.4%. A pesar de la disminución constante, el nivel de subalimentación en Panamá se mantuvo más alto que el promedio de ALC que era de 6.8%. Después de la pandemia, con la recuperación económica y la creación de nuevos programas para mitigar los efectos de la crisis del COVID-19, la prevalencia de subalimentación disminuyó en Panamá hasta el 5.8%. En cuanto al estado nutricional de los menores de 5 años, en el 2019, el 15.8% de estos presentaron desnutrición, afectando principalmente a los menores de 2 años. Al igual que la prevalencia de subalimentación, la desnutrición disminuyó notablemente desde 2003 cuando era de 22.2%. Los menores de 5 años del área indígena reportaron la

disminución más importante (-20%). Sin embargo, siguen siendo la población más vulnerable de padecer desnutrición crónica, alcanzando cifras tres veces más altas que los niños del área urbana y rural, con una prevalencia de 39%⁸⁶. A pesar de que la desnutrición haya disminuido, según la FAO, Panamá es el cuarto país con mayor porcentaje de niños con desnutrición en la región e incluso la prevalencia es más alta que la del promedio regional (11.4%).

A nivel nacional, la desnutrición es un problema de salud pública moderado y en disminución, pero el problema de exceso de peso está aumentando considerablemente en los últimos años.

En 2019, el exceso de peso (obesidad y sobrepeso) en los adultos alcanzó una prevalencia de 71.7%, concentrada

86 Encuesta Nacional de Salud de Panamá (ENSPA) 2019.

principalmente en personas de 30 y 40 años. La malnutrición por exceso ocurre principalmente en el área metropolitana, pero en algunas otras regiones también es considerablemente alta, como en la provincia de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé (87% y 69% respectivamente). De hecho, en los últimos 16 años las comarcas registraron los mayores aumentos en obesidad, acercándose a niveles similares del área urbana y nacional⁸⁷. Se trata del principal problema de salud pública en cuanto a su aumento: de 2003 al 2019, la prevalencia de sobrepeso se mantuvo relativamente constante, mientras que la de la obesidad aumentó 17%.

Los precios internacionales de los combustibles fueron el principal factor en la disminución del nivel general de precios en 2020 y su rebote en 2021, que ha continuado en ascenso en 2022.

Con la caída de los precios internacionales de los combustibles durante la pandemia, Panamá experimentó una deflación de -1.5% en 2020. Sin embargo, desde marzo de 2021, la inflación empezó a crecer de forma sostenida. Desde finales de ese año, el crecimiento del Índice de Precios al Consumo (IPC) general ha sido superior al crecimiento del IPC de los alimentos, al contrario de lo que ha sucedido en general en los países de la región. En particular, el nivel más alto de inflación desde 2012 fue en junio de 2022 cuando creció 5.2% interanual, mientras que en el componente de transporte (que contiene los combustibles) creció 20.4% y los alimentos y bebidas no alcohólicas se incrementaron solo 4.2%. Por otro lado, desde enero de 2022 el costo de la Canasta Básica de Alimentos⁸⁸ (CBA) ha presentado incrementos

87 Ibid.

88 La CBA es calculada por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) investigando los precios más bajos de los productos seleccionados de acuerdo con los criterios de universalidad, aporte energético y participación porcentual en el gasto. La ACODECO visita supermercados, minisúper y abarroterías, y calcula el costo de la canasta para cada tipo de establecimiento.

constantes por encima del IPC. En junio de 2022 el costo de la CBA aumentó 6.5% en términos interanuales, principalmente por el aumento de productos como la yuca, lentejas, pescado, huevos y margarina.

Panamá depende de la importación de los principales alimentos consumidos por la población.

Según la CEPAL, Panamá se encuentra entre los países deficitarios en el comercio exterior de alimentos junto con Belice, El Salvador, Haití, República Dominicana y Venezuela, con un déficit de US\$-2,857 millones. En particular, las importaciones de alimentos sobre las importaciones totales antes de la pandemia se mantenían constante en un 10% y luego aumentaron a 18% en 2021, superior al promedio de ALC que es 8.4%⁸⁹. Según la FAO, en 2019 Panamá tenía una alta dependencia a la importación de los cereales (67%).

También es importante destacar la alta dependencia a las importaciones de los productos que ocupan un lugar importante en el consumo de la población, de acuerdo con la canasta básica de alimentos calculada a partir de la Encuesta de Ingresos y Gastos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). En 2018, el 75% o más de la cantidad disponible para consumo de lentejas, ajos, porotos, cebollas, atún y sardinas en conserva y aceites vegetales son importados, mientras que otros productos que también son prioritarios en la alimentación de los panameños, como el arroz, papas, frijoles y cebolla se importan en un 50%⁹⁰. Otra característica importante en Panamá es la dependencia de los fertilizantes. Panamá no produce ningún tipo de fertilizante, por lo que depende totalmente de las compras del exterior.

89 Indicadores del Banco Mundial, 2022. <https://data.worldbank.org/indicator/TM.VAL.FOOD.ZS.UN>

90 Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Hoja de Balance de alimentos, 2018. https://www.inec.gob.pa/publicaciones/Default3.aspx?ID_PUBLICACION=1063&ID_CATEGORIA=4&ID_SUBCATEGORIA=33

2.Respuestas de política

El descontento social aumentó producto del crecimiento de los precios, entre otros factores, causando protestas y paralización de varias actividades económicas en el país, lo que determinó la acción del gobierno.

Desde el mes de mayo se registraron disturbios y protestas en diferentes puntos del país, donde los manifestantes solicitaban el control del precio del combustible, la ejecución de inversiones incumplidas por el gobierno y empleos. En julio, se registraron nuevas protestas a nivel nacional, demandando más transparencia; control del gasto; reducción de los precios de la comida y combustible y mejores políticas públicas en salud, educación y seguridad social. En consecuencia, los cierres de vías y manifestaciones que se mantuvieron por aproximadamente tres semanas generaron graves afectaciones a la cadena de suministros de productos agrícolas y pérdidas económicas. En respuesta a ello, el Gobierno creó una mesa de diálogo con los principales actores sociales que lideraban dichas protestas para negociar, entre otras cosas, una serie de medidas para reducir los costos de la canasta básica, energía y combustibles. Además, antes de las protestas el Gobierno había aprobado otras medidas para evitar el aumento del pasaje en el transporte colectivo.

Para reducir el precio de los alimentos el gobierno implementó diversas medidas.

Desde antes de las protestas (abril 2022), el Ministerio de Desarrollo Agropecuario había aprobado un apoyo temporal a los productores de arroz para garantizar la cosecha del ciclo agrícola 2022-2023. En particular, el Gobierno aprobó reconocer a los productores de arroz US\$8,50 por cada quintal (húmedo y sucio) cosechado como un apoyo transitorio y no prorrogable. Dicha medida fue implementada para evitar el desabastecimiento y mantener la seguridad alimentaria del país luego de las

perturbaciones de los mercados internacionales derivadas de la pandemia y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Por otro lado, tras las protestas y para reducir el costo de la canasta básica, se implementaron distintas medidas en 71 productos alimenticios y de higiene personal. Por un lado, incluir diez productos adicionales a la canasta básica de alimentos del programa de control de precios⁹¹. Por otro, otorgar un subsidio al consumo de 36 productos nacionales que son comprados por el Gobierno a productores panameños y luego son puestos a la venta en mercados gubernamentales a nivel nacional y en tiendas, minisúper y abarroterías de las Comarcas con un 25% de descuento. La tercera medida consiste en fijar un límite máximo al margen de comercialización minorista de 17 productos, que está entre 15% o 20% (dependiendo del tipo de producto). Cada una de estas medidas representa aproximadamente un tercio del consumo total de los hogares en la canasta básica.

El gobierno también implementó medidas para contener el aumento en el precio de los combustibles, que tienen un impacto en los de los alimentos, que posteriormente se prorrogó hasta el 15 de enero de 2023.

Desde el 3 de junio, el Gobierno fijó temporalmente el precio del galón de gasolina y diésel en US\$3.95 para el transporte público de pasajeros y la flota comercial e industrial, por un periodo de tres meses prorrogables. Asimismo, estableció un vale de combustible para la maquinaria agrícola y la flota pesquera artesanal de pequeña escala. Tras las mencionadas protestas, desde el 15 de julio dicha medida se amplió a todos los autos con matrícula particular y, desde el 18 de julio,

91 Programa creado el 1 de julio de 2014 para mitigar el impacto de la inflación de ese momento. En 2014 se establecieron precios máximos de venta a 22 productos de la CBA compuesta de 59. Desde entonces, cada seis meses se evalúa si se excluye o incluye productos de acuerdo con la evolución de los precios y comportamiento de la economía. En la última evaluación (30 de diciembre de 2021), el programa tenía 14 productos y se excluyeron 6.

se redujo el precio tope a US\$3.25 por tres meses. Como resultado, la inflación en el mes de julio registró una caída de -1.2%, comparado con el mes anterior, mientras que la inflación interanual fue de 3.5%; la primera disminución mensual en lo que va del año.

El costo fiscal que se presupuestó por el subsidio a los combustibles asciende a 0.4% del PIB.

En cuanto al subsidio a los combustibles, el Gobierno presupuestó US\$320 millones (0.4% del PIB). Además, según las autoridades, el Gobierno dejaría de percibir US\$18 millones al año (0.03% del PIB) por la eliminación de los aranceles de los productos sujetos a la regulación.

El BID ha apoyado a Panamá con un proyecto que tiene como objetivo mejorar la seguridad alimentaria y los ingresos de los pequeños agricultores familiares.

Dichos objetivos se buscan alcanzar mediante la transferencia de conocimientos, innovación e investigación agroecológica, así como la mejora de la capacidad de gestión de los organismos encargados de la política agraria panameña. Además, el proyecto tiene como finalidad disminuir las pérdidas postcosechas, aumentar el valor agregado de los productos y mejorar el acceso a los mercados.

REPÚBLICA DOMINICANA

Juan Carlos López y Joaquín Zentner⁹²



56

1. Panorama de la seguridad alimentaria

En República Dominicana, la seguridad alimentaria tiene una naturaleza prioritaria que se refleja en el marco jurídico vigente.

El artículo 54 de la Constitución consagra la seguridad alimentaria dentro de los derechos económicos y sociales: “El Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuarios, con el propósito de incrementar la productividad y garantizar la seguridad alimentaria”. En julio 2016, para dar estabilidad, institucionalidad y continuidad a estas iniciativas y fruto de un proceso participativo y consensuado, se promulgó la Ley 589-16 sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ley SSAN), y en 2018 salió el reglamento de la ley y se publicó el Plan Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional 2019-2022 (Plan SSAN).

⁹² Se agradecen los comentarios de Luis de los Santos, Bruno Jacquet, y Gilles Damais.

En los últimos 20 años el crecimiento económico y las mejoras en la producción de alimentos han permitido avances en materia de seguridad alimentaria y nutricional⁹³.

De acuerdo con el Plan SSAN, para 2014-2017 se había reducido un 52%-60% las personas que padecen hambre respecto a los niveles de 1990-1992, según las mediciones de FAO y IFPRI. De hecho, se aduce que el progresivo descenso observado permitió cumplir la meta de los ODM para 2010-2012. Además, se indica que para el periodo 2014-2016 el suministro de alimentos en el país fue 109% superior a las necesidades calóricas promedio de la población. Esto como resultado de un crecimiento promedio de la oferta neta de alimentos de un 3.7% anual durante el periodo 2004-2014 y un crecimiento de un 2.4% en

⁹³ Una problemática en cuanto al balance nutricional es la prevalencia de sobrepeso u obesidad, que según un estudio del MSP en 2021 rondaba el 70%.

términos per cápita para el mismo periodo. De igual forma, datos del Ministerio de Agricultura de la República Dominicana reflejan que para 2017, la producción nacional representaba una participación superior al 95% en el consumo aparente de bienes agropecuarios básicos en la alimentación del dominicano, tales como el arroz, carne de pollo, huevos, musáceas y tubérculos.

La desnutrición exhibe una tendencia decreciente en la primera década del siglo XXI.

La evolución del indicador de la prevalencia de desnutrición en la población ha disminuido, pasando de un promedio de 22.4% en 2000-2005 a 11.1% en 2010-2012. De esta manera, entre 2005 y 2012 la cantidad de personas desnutridas se redujo a la mitad, bajando de 2.1 millones a 1 millón (FAO). Los años posteriores siguió la reducción en la prevalencia, desde un promedio de 8.9% en 2011-2015 a 6.1% en 2017-2019. El indicador de desnutrición aumentó a 6.7% para 2019-2021 debido a la pandemia. Sin embargo, al comparar con el promedio regional de América Latina y el Caribe, el valor para República Dominicana es menor (mejor) desde 2016-2018. Lo anterior se asocia tanto a la implementación de programas sociales como a la moderación en los persistentes niveles de pobreza que se relacionan directamente con desnutrición.

Con la pandemia de Covid-19 la incidencia de inseguridad alimentaria en sus distintas dimensiones aumentó.

Según el monitoreo de hogares del Banco Mundial (BM), en mayo 2020 un 44% de hogares reportaron quedarse sin comida en algún momento por falta de ingresos, con un 33% revelando que había sufrido hambre. En julio-agosto de 2020 un 11.9%-12.4% de los hogares afirmaron haber pasado un día entero sin comer en el mes por no tener recursos, proporción que se incrementó a 17.4% en junio 2021. Según la misma fuente del BM, otro

indicador de la estabilidad y el acceso es verse obligado a “saltarse” comidas, algo que reportó entre 32% y 38% de los hogares en mayo-agosto 2020. Con relación a la utilización, en junio 2021 un 30% de los hogares fue incapaz de comer de forma saludable, nutritiva o comidas preferidas por falta de recursos.

El valor agregado del sector agropecuario ha crecido a un ritmo más lento que el resto de la economía, con lo cual ha bajado su participación relativa en el PIB desde 10% en 1994 a 6.7% en 2000 hasta 5.2% en 2014.

En los recientes 9 trimestres (jul. 2020-sep. 2022) el crecimiento interanual ha sido de 2.6% promedio, cerca de la mitad que en el periodo previo (4.8%, abr. 2018-jun. 2020) y que el promedio 1992-2017 (4.5%). Este desempeño se verificó a pesar de que la productividad media por trabajador en el sector creció 3.2% anual entre 1991 y 2014, con poco grado relativo de encadenamiento con el resto de la economía.

La coyuntura internacional de subida de precios de materias primas ha tenido repercusión en los precios locales, la principal preocupación de la población en las encuestas de opinión.

A nivel doméstico la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas es de 10.4% entre agosto 2021 y agosto 2022, similar a lo que se observaba hace un año atrás (10.7% respecto a agosto 2020); el promedio 2009-2019 fue de un 4.4%. En lo referente a la percepción, la encuesta SEIA-Red Actúa, levantada por última vez en abril-mayo 2021, muestra que en ese momento: el 76.8% de la población le preocupa que su hogar no tenga suficientes alimentos; el 30.87% de la población no había recuperado su nivel de bienestar prepandemia en lo que concierne a alimentos; el 36% reducía la porción o cantidad de comida servida y el 25% disminuía la frecuencia diaria (veces) de comida.

A mediano plazo, las amenazas zoonóticas y fitosanitarias actuales (peste porcina africana, banano, cacao) podrían afectar directa e indirectamente el nivel de seguridad alimentaria de hogares rurales vulnerables y encarecer el precio del plátano para los consumidores urbanos, sin medidas de control y prevención drásticas.

2. Respuestas de política

Para garantizar la seguridad alimentaria del país y la estabilidad de los precios el presidente Luis Abinader anunció la puesta en marcha de 10 medidas.

El presidente de la República anunció el 27 de febrero un nuevo paquete de subsidios dirigidos a los pobres, como respuesta a la creciente inflación y a la amenaza económica que supone la guerra en Ucrania. El nuevo paquete económico beneficia a por lo menos 300,000 personas con diversos programas sociales (con el reto de focalización), incluyendo ayudas directas, subsidios al GLP y la duplicación del número de comedores populares, que atenderán a 136,000 personas por día. Las medidas incluyen:

- **Transferencias de apoyo directo a los más necesitados** tales como los programas especiales de venta de comida, incluyendo el aumento de las transferencias a la tarjeta Supérate (que duplicaron su monto a \$1,650 para el componente Aliméntate y aumentaron su cobertura desde 2021), el incremento del subsidio del Bono Gas (de \$228 a \$470), la ampliación de las raciones de alimentos en los comedores económicos, la instalación de más mercados populares del INESPRES y duplicar sus bodegas de venta directa de productos en el país.
- **Apoyos a la oferta productiva**, mediante subsidios a las importaciones de maíz, trigo, soya, harina y grasa vegetal, subsidios para la producción de arroz y

pollos, compra de semillas certificadas, ley 6-22 de tasa aduanal cero (temporal 6 meses) para 67 subpartidas arancelarias de bienes que afectan el costo de los alimentos de la canasta básica familiar. La Comisión para las Importaciones Agropecuarias, encabezada por el Ministerio de Agricultura, junto a otros organismos del Estado, ha emitido autorizaciones para la importación de ajo, alas de pollo, barriga de cerdo, carne de cerdo, carrillera de cerdo, grasa vegetal, habichuelas negras, habichuelas pintas, leche en polvo, muslo de pollo, patas de pollo, pastas alimenticias sin cocer, pechuga de pollo, pierna de cerdo y pollos enteros congelados.

Los recursos destinados por el Gobierno a la producción o comercialización de alimentos sumaron RD\$2,678.8 millones en el primer semestre de 2022.

De ese monto, RD\$1,223.8 millones correspondieron al subsidio a los fertilizantes y RD\$828.1 millones a la harina. También, se asignaron RD\$200.9 millones en ayuda a los productores de pollo y los restantes RD\$426 millones se utilizaron a través del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRES) para la venta combos alimenticios.

El alcance (población objetivo) y la extensión (vigencia) de las medidas fueron ampliándose progresivamente, con un horizonte del año completo.

Inicialmente algunas medidas (como la ampliación de cobertura en Supérate) venían contemplándose desde 2021, al igual que los subsidios a combustibles; otras como el arancel 0 eran estrictamente temporales por la coyuntura y no permanecerían hacia 2023. A mediados de año el FMI planteaba (según las autoridades nacionales) un costo de 0.6% del PIB, incluyendo 0.3% del PIB para congelamiento de precios de hidrocarburos por 4 meses (como se anunció de manera original,

contingente a los precios internacionales) y 0.2% del PIB para las medidas relacionadas a alimentos. Hasta la primera quincena de octubre la DIGEPRES reporta una ejecución presupuestaria de las medidas (incluyendo subsidios a los combustibles, energía y transporte) de RD\$58,599.2 MM, de los cuales RD7,078.8 MM son directamente relacionados con alimentación. En el proyecto de presupuesto reformulado se contemplan RD\$92,305.8 MM por concepto de las medidas tomadas, lo cual representa 1.5% del PIB; de ese total, el componente alimentario sería de RD\$17,511.1 MM, un 0.3% del PIB.

Además, en julio se anunció el Bono de Apoyo Familiar, dotado de un monto de RD\$1,500 (USD27.5) para 1 millón de familias.

Esto es parte de las medidas indicadas en la reformulación presupuestaria: RD\$5,925 millones (USD 107.2 MM) para la ampliación de Supérate; RD\$4,516 MM para subsidios a productos que impactan la canasta básica; RD\$2,490 MM para subsidio a fertilizantes; RD\$1,871 MM para nuevos comedores económicos; RD\$1,209 MM adicionales para el Plan Social. Además, una parte importante del subsidio a los combustibles -precios congelados desde la segunda semana de marzo- va destinado al gasoil, un importante insumo para la producción.

El BID apoya la seguridad alimentaria en el país con varios financiamientos.

A solicitud del banco agrícola, se está preparando un financiamiento para adquisición de nuevas tecnologías para el sector agropecuario. Recientemente, en el cierre del XIII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario que organiza la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), el presidente Luis Abinader reiteró su apoyo a la producción nacional para garantizar la seguridad alimentaria del pueblo dominicano. Agregó además que el préstamo que tomará

el Gobierno con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de US\$120 millones, y que será utilizado para la adquisición de nuevas tecnologías para el sector agropecuario, estaba listo para ser enviado al Congreso Nacional. Una operación de inversión en ejecución, el programa de sanidad agroalimentaria e innovación (US\$ 50M), busca fortalecer la capacidad del país de prevenir y mitigar el impacto de enfermedades zoo y fitosanitarias tanto en la producción alimentaria como en los ingresos de familias rurales vulnerables.

Del lado de la demanda, el BID financia el programa SUPERATE ejecutado desde el Gabinete de Políticas Sociales, con un componente importante de transferencias monetarias a hogares vulnerables y un componente de fortalecimiento del sistema de gestión y focalización del instrumento. Este instrumento flexible permite ajustar muy rápidamente el nivel y el alcance de subsidios monetarios en situaciones de crisis coyunturales, como fue el caso con la epidemia de COVID. El BID financia también el programa Agroforestal, el cual contribuye con el incremento de los ingresos agropecuarios de pequeños productores en zonas montañosas de República Dominicana, y por ende el acceso a alimentos de familias vulnerables.



**Catalogación en la fuente proporcionada por la
Biblioteca Felipe Herrera del
Banco Interamericano de Desarrollo**

Seguridad alimentaria en Centroamérica, Panamá, República Dominicana, México y Haití: panorama y respuestas de la seguridad alimentaria en la región / María Cecilia Deza, Marta Ruiz-Arranz, editoras.
p. cm. — (Monografía del BID ; 1047)
Incluye referencias bibliográficas.

1. Food security-Central America. 2. Food security-Haiti. 3. Food security-Dominican Republic. 4. Coronavirus infections-Social aspects-Central America. 5. Coronavirus infections-Social aspects-Haiti. 6. Coronavirus infections-Social aspects-Dominican Republic. I. Deza, María Cecilia, editora. II. Ruiz-Arranz, Marta, editora. III. Banco Interamericano de Desarrollo. Departamento de Países de Centroamérica, Haití, México, Panamá y la República Dominicana. IV. Serie.

IDB-MG-1047

Códigos JEL: E3, I3, Q18

Palabras clave:

seguridad alimentaria, inflación, precios, pobreza, agricultura, Centroamérica

Copyright © 2022 Banco Interamericano de Desarrollo. Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons IGO 3.0 Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND) (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode>) y puede ser reproducida para cualquier uso no-comercial otorgando el reconocimiento respectivo al BID. No se permiten obras derivadas. Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de conformidad con las reglas de la CNUDMI (UNCITRAL). El uso del nombre del BID para cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID, no están autorizados por esta licencia CC-IGO y requieren de un acuerdo de licencia adicional. Note que el enlace URL incluye términos y condiciones adicionales de esta licencia. Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.



SEGURIDAD ALIMENTARIA
en **CENTROAMÉRICA, PANAMÁ,**
REPÚBLICA DOMINICANA,
MÉXICO y HAITÍ